

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

Vobis etiam merito accepta reformis, qui tam strenue religionis, et
iustitiae partes tuendas suscepistis....

DIARIO CATÓLICO, APOSTÓLICO ROMANO.

Deumque, cuius causam agitis, rogamus ut vos in proposito confirmet
—Pie IX al Director y redactores de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Madrid, 12 rs. al mes.—En Provincias 17 rs. al mes, y 50 por trimestre en casa de los comisionados, y 15 rs. al mes y 42 el trimestre en la administración.—En el Extranjero: 70 rs.—En Ultramar 90 rs. trimestre.—La administración no responde de los sellos que se le remitan en carta sin certificar.

PUNTOS DE SUSCRICION.—Madrid: En la administración, calle de Pelayo, números 33 y 40, cuarto principal de la derecha.—Provincias: En los puntos que se anuncian el último día de cada mes.—París: Agencia franco-española de D. C. A. Saavedra, 55, rue Taitbout.—No se devuelve ningún manuscrito.

DICTAMEN

DE LOS JURISCONSULTOS ACERCA DE LA CONDUCTA DE
LOS CAPITANES GENERALES DE NAVARRA Y LAS PRO-
VINCIAS VASCONGADAS Y DE BURGOS, RESPECTO A LOS
CARLISTAS PROCESADOS DESDE AGOSTO HASTA LA
FECHA.

A continuación de estas líneas verán nuestros lectores evacuada la consulta que los abogados carlistas han hecho a nueve de los primeros y más célebres abogados de Madrid, de cuyo número se excluyó cuidadosamente a los que por pertenecer a nuestras creencias, o al partido republicano, podrían ser tachados de parciales.

Son casi los mismos que un año hace entendieron en otro asunto análogo.

La comisión de abogados sometió a tan autorizada junta las cuestiones que van respectivamente al frente de cada respuesta, y si el tono del documento es elevado, y si no se halla escrito con la tinta de la pasión, antes bien, parece que ha buscado con cuidado las voces menos ofensivas, en cambio resulta claramente, como no podía menos de ser, toda la legalidad de los procedimientos empleados con nuestros infelices amigos, ilegalidad que atrae sobre sus autores la debida responsabilidad legal que las nuevas disposiciones imponen a los transgresores de los derechos individuales, que son a un tiempo mismo el *Deus ex machina* de la revolución de Septiembre, y la víctima propiciatoria de las iras gubernamentales en este funesto bienio.

Grave, reposado y digno es el voto de los hombres de la ciencia, que decantando todo color político y toda tendencia de partido se han elevado a formar su juicio en la alta esfera del derecho constituido, sin pasión ni preocupación, y con una seriedad que hace honor a su bien merecida fama.

Nos abstenernos de propósito por hoy de todo comentario, que pudiera desdiseñar del intento de los firmantes de tan notable documento.

En medio de las tempestades revolucionarias que vienen asolando tiempo hace nuestro pobre país, da aliento al corazón ver cómo el foro español responde a la invitación de sus compañeros, que sin preocuparse de las ideas políticas conocidas de casi todos los abogados que evacuaron la consulta, recurrieron a las eminencias del colegio de Madrid para atemperar su conducta a tan ilustrado consejo.

Ante este fallo, si menos solemne, no menos autorizado ¿qué hará el Gobierno? Perseverar en su conducta con los carlistas procesados, parece imposible. Convencer a los que emitieron su voto, sería temerario; indemnizar y reparar los males, no guarda relación con sus hábitos, y esperar que los fallos de los consejos de guerra vayan anulándose y casándose por los tribunales, sería dejarse llevar a una derrota segura; si hay aquí, que no lo dudamos, jueces, integros y tribunales justicieros que comprendan sus deberes.

La gran cuestión está planteada y la comisión central de abogados carlistas solo aguarda los poderes para deducir las acciones que el dictamen de las instancias del foro español reconocen que pueden ejercitarse, para el debido escarmiento de los transgresores de la Constitución; escarmiento que da origen a la responsabilidad civil consiguiente, y al levantamiento de los vejámenes que vienen sufriendo nuestros correligionarios presos.

Aunque fuese posible la abolición de los responsables, los procedimientos alcanzarían el inmenso resultado de que se conozca a dónde puede llegar el olvido de la justicia, única base del gobierno de los pueblos, ya que es el valladar en que se estrellan las iras y las fuerzas perturbadoras de los poderosos contra los débiles.

No queremos detenernos en semejante, imposible hipótesis; pues aunque los encargados de administrar justicia no son amigos nuestros, haríamos conocido agravio a su alta investidura y a las tradiciones de la toga española, si admitiésemos tan solo la duda.

Hechas estas ligeras indicaciones, hé aquí el dictamen aludido en ellas.

La Comisión central de Abogados para la protección y defensa de los carlistas, nos consulta acerca de algunas cuestiones, cuyo esclarecimiento considera necesario para el buen desempeño de la misión que se ha impuesto.

Al consignar nuestra opinión acerca de esas cuestiones, graves y difíciles a no dudarlo, debemos establecer ante todo que nos circunscribiremos ahora, lo mismo que hicimos ya en una ocasión análoga a la presente, al examen de las disposiciones del derecho constituido, absteniéndonos cuidadosamente, no solo de entrar en la apreciación doctrinal de esas mismas disposiciones, sino también de cuanto no constituya en su acepción más estricta el aspecto puramente jurídico de los problemas legales, cuya solución se nos pide.

Así lo exige el carácter por virtud del cual somos interrogados, y que es acaso el único que puede permitirnos contestar con la uniformidad que vamos a hacerlo.

PRIMERO.

Dada la Constitución de la nación española de 4.º de Junio de 1869, y especialmente los artículos 41 y 31, y no estando suspendidos por una ley las garantías constitucionales, ¿ha podido legalmente el capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra dictar sus dos bandos de 27 y 30 de Agosto último, declarando en el primero el estado de guerra en el territorio que comprenden las cuatro provincias de su mando, y estableciendo en ambos penas y tribunales especiales diferentes de los que las leyes comunes tenían establecidos?

CONTESTACION.

Para responder a esta pregunta, creemos conveniente distinguir en ella dos partes. El capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra declaró ese territorio en estado de guerra, y semejante declaración puede y debe apreciarse con separación de las medidas que en sus bandos dictó como consecuencia de ella.

Que la declaración de estado de guerra determina en el territorio a que se aplica la suspensión de las garantías que alude el art. 31 de la Constitución, nos parece tan evidente, que consideramos inútil detenernos a demostrar la exactitud de esa proposición. En caso necesario alcanzaremos tal resultado por medio de la comparación entre los preceptos

consignados en los artículos 2.º, 3.º y 6.º, y primeros párrafos del 17 de la misma Constitución, y las medidas que la autoridad militar puede adoptar en estado de guerra con arreglo a la ley de orden público. Lo obtendríamos también con solo considerar que esta ley es la que fija y determina qué es lo que constituye el estado de guerra, y que ella no tiene aplicación según el texto constitucional, sino después de promulgada la ley de suspensión de garantías.

Estado de guerra y subsistencia de todas las garantías constitucionales, son cosas que esencialmente se excluyen.

Siendo esto así, produciendo la declaración de estado de guerra la suspensión de las garantías mencionadas en el art. 31 de la Constitución, claro es que tal declaración no puede hacerse sin que previamente se haya promulgado la ley que permita la suspensión temporal de esas mismas garantías, en toda la monarquía o en parte de ella. Es un hecho que tal ley no se había publicado, ni aun siquiera presentado para su discusión a las Cortes Constituyentes, cuando el capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra declaró aquel territorio en estado de guerra, y de ese hecho se deduce con completa evidencia, dadas las premisas antes establecidas, que obrando dentro de la esfera legal, no pudo aquella autoridad hacer lo que hizo.

La gravedad de la declaración que acabamos de establecer, las consecuencias que de ella han de desprenderse necesariamente, nos impulsan a no darnos por satisfechos con el razonamiento que acabamos de consignar, apoyados en las terminantes palabras del art. 31 de la Constitución que hemos copiado así a la letra. Vamos pues, a buscar la comprobación de aquel razonamiento en el examen de la ley de orden público, y allí la hallaremos, como no puede menos de suceder, tratándose de una medida legislativa cuyo objeto fué el desarrollo, el afianzamiento práctico de ese mismo precepto constitucional.

La ley de orden público empieza reproduciendo lo consignado en el art. 31 de la Constitución, acerca de la necesidad para su aplicación de la suspensión de garantías, y lo hace, no solo citando ese mismo artículo, sino empleando palabras, que, si cabe, precisan más su sentido. «Las disposiciones de esta ley serán aplicadas únicamente», dice el art. 4.º. Y la generalidad con que la frase se halla redactada demuestra que en ella se comprenden todas las medidas, de que la ley hace mérito, sin que quepa admitir excepción alguna que no se halle establecida de una manera expresa, lo cual no sucede ciertamente. Y el adverbio usado por el legislador, evita hasta la posibilidad de que ese precepto sea eludido. En el espacio de tiempo que media entre la promulgación de la ley de suspensión de garantías y el alzamiento por las Cortes de esta misma suspensión es en el que únicamente puede aplicarse la ley de orden público.

Si todas las disposiciones de esta ley se hallan sometidas para su aplicación al requisito previo, tantas veces indicado; si esa regla no admite excepción alguna; si todas las medidas que en estado de guerra pueden adoptarse forman parte de las que son objeto de esa misma ley, como lo demuestra el texto de su art. 2.º, y como lo comprueba la circunstancia de hallarse destinado el título 2.º a fijar las que en semejante estado es dable dictar, claro y evidente es, que la declaración de estado de guerra no puede hacerse sin que antes se haya promulgado la ley especial necesaria para ello.

Lo mismo el texto de la Constitución que el de la ley de orden público, demuestran que el capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra hizo lo que legalmente no podía hacer, al declarar aquel territorio en estado de guerra; la violación de las leyes por ese acto ejecutado, es indudable.

Y queriendo confirmar más y más esta consecuencia, queriendo ponerla al abrigo de toda impugnación, vamos a hacernos cargo de algunas objeciones que comprendemos podrían hacerse a ella.

La lectura de los artículos 12 y siguientes de la misma ley de orden público, podría acaso hacer creer, que en ciertas y determinadas circunstancias estaba autorizada la inmediata, la instantánea declaración de estado de guerra, sin necesidad de la existencia previa de la ley de suspensión de garantías. Sin embargo, el examen detenido de estos mismos artículos, demuestra que tal creencia sería de todo punto infundada.

Ya hemos visto que el precepto consignado en el artículo 31 de la Constitución, y reproducido en el 4.º de la Ley de orden público es general y no admite excepción alguna; ahora debemos añadir, que esos artículos son la derivación lógica de un sistema con arreglo al cual no cabe admitir que por virtud de circunstancias especiales, aun las más excepcionales, se establezca una derogación siquiera temporal o parcial de los preceptos que de él emanan.

Por esto precisamente el artículo de la Constitución a que venimos refiriéndonos, solo autoriza la suspensión de las garantías constitucionales, temporal y por medio de una ley, cuando así lo exija la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias. Cuando el legislador ha empleado al redactar la ley fundamental palabras tan terminantes, y cuando aún en esas circunstancias extraordinarias y por exigirlo la seguridad del Estado, solo ha permitido la suspensión de las garantías por medio de una ley, no cabe sostener que de este requisito se prescinda en ningún caso; las eventualidades que se presenten, por graves y anómalas que sean, no pueden menos de estar comprendidas en las palabras empleadas en la Constitución; no pueden autorizar que del precepto en esta consignado se prescinda.

Sería, pues, contrario a la lógica admitir que los artículos de la Ley de orden público, a que ahora nos referimos, contravinieran a la ley que declara el estado de guerra, sin la existencia previa de la ley de suspensión de garantías. Además, examinándolos con detenimiento, es fácil convencerse de que por el contrario parte del supuesto de que tal Ley exista en armonía con el sistema que ha prescrito la ley de orden público, de que forman parte. Ellos determinan lo que ha de hacerse, cuando sean insuficientes para dominar la agitación y restablecer el orden, las medidas que cabe adoptar en el estado de prevención y alarma: ellas constituyen un paso más allá que ese mismo estado, y este, que es la consecuencia inmediata de la ley de suspensión de garantías, no puede existir sin que tal Ley haya sido promulgada. Porque las garantías constitucionales, que pueden ser suspendidas, lo están ya, se ha entrado en el estado de prevención, y claro es que para lo más no cabe dejar de existir el mismo requisito que para lo menos era indispensable.

Además, la invocación de esos artículos, aun cuando significaran lo que ciertamente no significan, carecería de toda importancia en el caso presente. Habían siempre tales artículos de actos de la autoridad civil, y aquí se trata de uno ejecutado por la militar; se refieren a localidades determinadas, o

poblaciones, sean o no capitales de provincia, y no a territorios, y precisamente cuando de estos se trata, cuando el estado de guerra haya de aplicarse a dos o más provincias, exige el art. 45 que sea el Gobierno quien determine el territorio que quedará sujeto al estado de guerra.

Lejos, pues, de autorizar el proceder del capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra, los artículos de que venimos ocupándonos, lo condenan bajo un aspecto distinto del que hasta ahora hemos examinado. Esa autoridad, cuando en dos o más provincias hubieran ocurrido actos de sedición, cuando en ellas se hubieran presentado grupos considerables de rebeldes armados, podría la declaración de estado de guerra, y al hacerla invadida las atribuciones, que precisamente para ese mismo caso, otorga la ley única y exclusivamente al Gobierno supremo, con sujeción por supuesto a las condiciones y requisitos siempre exigidos por ella.

A la violación de los preceptos consignados en la ley fundamental del Estado, viene por tanto a unirse la usurpación de las atribuciones que competen al Gobierno.

Tampoco cabe invocar lo dispuesto en el art. 3.º de los adicionales a la ley de orden público, porque precisamente este artículo contiene una nueva confirmación de la doctrina que sentamos. No hubo, no llegó a haber en el caso de que nos ocupamos guerra civil formalmente declarada, y solo cuando esta hubiera existido, habría prescindido de los preceptos de la ley de orden público, con arreglo al lo dispuesto en ese artículo, si lo permitiese, que ciertamente no lo permite, la inflexibilidad del 31 de la Constitución.

Y antes de pasar adelante, séanos lícito consignar una observación. Comprendemos que puede haber momentos en que las autoridades constituidas se encuentren colocadas en situación harto delicada, viéndose privadas de las facultades necesarias para hacer frente a las complicaciones que se les presenten y no debiendo dejar que tales complicaciones se desarrollen y aumenten, comprendemos que en tales circunstancias pueda aparecer que es un mal menor extralimitar las atribuciones que la ley confiere, y evitar así males de gran trascendencia.

Pero semejantes consideraciones, cuya fuerza no tenemos para que apreciar fuera del terreno jurídico, carecen de ella por completo, cuando dentro de este se examina la cuestión, y dentro de él es como nosotros la examinamos únicamente. Ya lo dijimos antes, pero no creemos innecesario repetirlo ahora; hablamos como letrados, como juristas, y no debemos tomar en cuenta consideración alguna, que sea ajena a la esfera del derecho constituido.

Antes de poner término a esta parte de nuestro dictamen, conceptuamos indispensable ocuparnos de las opiniones, que según se nos asegura ha emitido el Consejo de Estado, acerca del punto que hemos examinado hasta aquí. Coza este alto cuerpo de consideración y respeto, tan merecidos, que hasta se nos indique la existencia de una opinión cuya contraria a la que hemos sentado, para que no podamos dejar de hacernos cargo de los fundamentos en que parece se ha apoyado.

Se nos asegura que por el ministerio de la Guerra se ha expedido en 19 de Julio último una circular, no publicada en la *Gaceta oficial*, pero cuyo texto se nos ha presentado; en ese documento, de acuerdo según en él se dice, con el Consejo de Estado, se dictan algunas disposiciones respecto de la aplicación de la ley de orden público.

Partiendo de la base de que tal circular exista y de que se halle redactada en los términos en que se nos afirma está, vamos a apreciar las doctrinas que ha establecido el Consejo de Estado en sentido completamente opuesto al que conceptuamos en armonía con la misma ley de orden público y con la Constitución.

«La prescripción comprendida en el art. 1.º de la ley de orden público, relativa a sus disposiciones, serán únicamente aplicadas cuando se haya publicado la ley de suspensión de garantías se entenderá», dice esta circular, que solo se refiere a «los artículos de dicha ley, cuya aplicación sea contraria a lo establecido en la Constitución de la monarquía.» Y semejante proposición que crea entre los diferentes artículos de la ley de orden público una distinción que el texto de ella misma rechaza, según antes hemos demostrado, va por tanto contra el artículo 31 de la fundamental.

No hemos de repetir aquí lo que antes hemos consignado al examinar así ese artículo constitucional, como el primero de la ley de orden público: dándolo por reproducido, estimamos que para combatir victoriosamente semejante distinción, basta que establezcamos, que dada la índole y objeto de la ley de orden público, todos sus artículos han de contrariar mas o menos directamente, lo que la Constitución de la monarquía tiene dispuesto para los tiempos normales. Esa ley es una medida de excepción que parte como base esencial, de la suspensión de las garantías reconocidas, y otorgadas por la Constitución misma, y el objeto de todos y de cada uno de sus artículos, es reglamentar lo que dada esa suspensión ha de hacerse: aun los consignados a preparar la adopción de las medidas extraordinarias, autorizadas por ley, tienen necesariamente esa misma tendencia.

Y la comprobación de este aserto se halla en la circular de que venimos ocupándonos; se afirma en ella. «Que no es necesario la previa publicación de la ley de suspensión de garantías, pero dar cumplimiento a lo prevenido en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de la orden pública», dándose por razón, que ninguno de ellos menoscaba los derechos que la Constitución otorga a todos los españoles y se limita solamente a determinar la manera como han de proceder las autoridades para restablecer el orden con más prontitud cuando se intente alterarlo a mano armada.» Pero al raciocinar así, se olvida que la consecuencia de esos artículos de la ley de orden público, es la declaración del estado de guerra, y a no sostener que semejante declaración no ha de producir resultado alguno eficaz, habrá de convenirse en que por virtud de la ejecución o cumplimiento de esos artículos, se menoscaban los derechos que la Constitución reconoce, en todo aquello en que esos derechos no son compatibles con el estado de guerra.

Cumplidos, como dice la circular, los artículos citados, hecha en su consecuencia la declaración de estado de guerra, podrán adoptar las autoridades todas aquellas medidas propias de ese mismo estado, y que solo caben en la esfera legal, dada la suspensión de las garantías constitucionales. Si se contesta negativamente a esta pregunta, no comprendemos cuál pueda ser la utilidad práctica que reporte la aplicación inmediata de esos mismos artículos sin necesidad de la previa promulgación de la ley de suspensión; pero si se contesta en sentido afirmativo, resultará probado con toda evidencia, que se menoscaban los derechos que la Constitución otorga, y esto sin que se haya llenado el requisito que al efecto y para casos determinados y con formalidades

prescritas de una manera clara y precisa, establece la misma Constitución en su art. 31.

Y la contradicción que existía entre las doctrinas sentadas en esa circular y los preceptos que al parecer quiere aplicar, se comprueba al ver que en aquella se establece: «que una vez declarado el estado de guerra, se dará puntual cumplimiento a cuanto previene el título 2.º de la mencionada ley de orden público, sin esperar a que se promulgue la ley de suspensión de garantías.» Decir que se cumplan artículos, cuyo resultado es que se declare el estado de guerra, porque ellos nada preciptúan opuesto a las garantías constitucionales, y decir a continuación que se cumpla desde luego cuanto estatuya un título de la ley de orden público, cuyas disposiciones son opuestas a esas mismas garantías, constituye en nuestro entender, una contradicción palmaria.

Sensible nos es expresarnos de este modo; pero lo exige imperiosamente la lectura de la consideración en que se apoya el precepto que últimamente hemos copiado: la aplicación inmediata del título 2.º de la ley de orden público, se razona diciendo así: «Toda vez que ya se han llenado las condiciones que exige el art. 11 de la Constitución.»

Puede ser que haya un error de copia en el ejemplo que se nos ha suministrado, y que el artículo citado sea el 31 en vez del 11; pero en uno u otro caso, la razón alegada no puede tener fuerza alguna.

El art. 11 no establece condiciones de ninguna clase, hallándose limitado a preceptuar que los jueces han de seguirse con arreglo a las leyes y a los tribunales, preexistentes a aquellos, y estos, y por lo mismo no cabe considerar en ningún caso que se han llenado condiciones que no existen. Si se pretendiera decir que declarado el estado de guerra hay ya, con arreglo a la ley de orden público, disposiciones especiales que fijan la tramitación de los juicios que han de sustanciarse y que establecen los tribunales ante los cuales han de seguirse esos mismos juicios, nuestra respuesta sería bien sencilla; esas medidas de procedimiento y de organización judicial no son aplicables, mientras no se publique la ley de suspensión de garantías, no constituyen, hasta que esto suceda, leyes adjetivas ni tribunales preexistentes; y aplicando unas y otras, sin embargo, se viola lejos de cumplirlo el art. 11 de la Constitución.

Y si la cita es del art. 31 de la misma ley fundamental, ¿cómo puede decirse que se han llenado las condiciones que esta exige para la aplicación de la ley de orden público, cuando no se ha promulgado la ley de suspensión de garantías, que como condición indispensable se establece en ese mismo artículo?

No tenemos para que entrar en la apreciación de los motivos que hayan inducido a consignar las doctrinas que al parecer ha emitido el Consejo de Estado; aun dando a esos motivos cuanto fuerza se quiere, siempre resultará que se ha cometido el error de la interpretación se trataba, y que para ello se ha incurrido en contradicciones patentes.

El examen detenido, acaso en demasía, de las objeciones que podrían oponerse a las doctrinas antes establecidas, nos permite considerar como comprobada la conclusión de que el capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra, al declarar aquel territorio en estado de guerra, hizo lo que legalmente no podía hacer.

Pero la existencia de esa circular de 19 de Julio último, ¿cómo puede decirse que se han llenado las condiciones que esta exige para la aplicación de la ley de orden público, cuando no se ha promulgado la ley de suspensión de garantías, que como condición indispensable se establece en ese mismo artículo?

Para resolver en cuanto al caso presente afecta esa cuestión, que es uno de los problemas jurídicos más difíciles y delicados que existen, el de la fijación de lo que constituye la obediencia debida, no tenemos necesidad de entrar en largos razonamientos, porque nos sale al paso el segundo párrafo del art. 30 de la Constitución, cuyo texto es terminante: «El mandato del superior no extingue la responsabilidad en los casos de infracción manifiesta, clara y terminante de una prescripción constitucional,» y como la infracción existe, como se refiere a un precepto de la Constitución, y como en ella concurren todas las demás circunstancias, exigidas por ese artículo 30 de la ley fundamental, claro es que la ley fundamental de 19 de Julio no puede alterar en nada, ni aun en cuanto a sus consecuencias, la deducción que hemos establecido: la responsabilidad del capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra es la misma, por haber hecho la declaración de estado de guerra, ora exista, ora no exista la circular con repetición mencionada.

Dijimos antes que en los bandos de 27 y 30 de Agosto último, debía considerarse con separación la declaración de estado de guerra y las demás medidas adoptadas como consecuencia suya. Hasta ahora hemos ocupado solo de aquella declaración; ahora vamos a hacernos cargo de estas medidas, prescindiendo por completo de cuanto a semejante declaración se refiera, aceptando como un hecho y limitándonos a apreciar únicamente si aun en este supuesto pudieron o no adoptarse en aquellos bandos las medidas que contienen.

En el primero de ellos se imponen penas que no estaban previamente establecidas por las leyes; se impone asimismo otra que la Constitución proscribía, y se establecen contribuciones especiales no votadas por las Cortes, contrariándose así las prescripciones terminantes de los artículos 31 y 45 de la ley fundamental.

Se manda fusilar inmediatamente a todo faccioso que sea cogido con armas, o que al huir las oculte y arroje, y el establecimiento de esa grave penalidad no está en armonía con lo dispuesto en el Código penal, ya se atiende al que rigió hasta 31 de Agosto último, ya por consiguiente, en la época en que el bando a que nos referimos se dictó, ya al que hoy se halla vigente.

Aquel establecimiento la pena de muerte (art. 468) para los promovedores y principales caudillos de la rebelión, pero no para todos los rebeldes, como hace el bando; los jefes subalternos podrían ser castigados con solo una cadena perpetua o con cadena temporal en su grado máximo (art. 469) y con esta misma cadena temporal, pero en toda su extensión (art. 470) los meros ejecutores de la rebelión. Aun cuando todos estos artículos, señalan, como máximo de la pena imponible la de muerte, basta conocer la estructura de aquel Código, las reglas en él fijadas, para la imposición de la penalidad, para comprender que en contados casos podría aplicarse a los jefes subalternos, y en casi ninguno a los meros ejecutores, la pena capital.

Si embargo, el bando la impone a todos los rebeldes, y por lo mismo contraria arbitrariamente lo prescrito en el último párrafo del art. 31 de la Constitución, cuyo texto es tan explícito y terminante que excusa todo comentario: en ningún caso los jefes militares o civiles podrán establecer otra penalidad que la que prescribe previamente por la ley.

El resultado es el mismo; y mayor la contradicción entre el bando y la ley penal, si se establece la comparación con el Código vigente: siendo aplicable este en cuanto a la imposición de penas, desde su publicación, como si no todas las mayor parte de las sentencias dictadas por consecuencia de ese bando, que expresamente no se ha derogado, lo habrán sido cuando el Código penal se hallaba ya en vigor, es oportuno ocuparse ya de este extremo.

Precisamente en el la represión ha sido mitigada; ya no siempre se impondrá a los promovedores y caudillos la pena capital; el art. 214 del nuevo Código señala para ellos la de reclusión temporal en su grado máximo a muerte; y para los jefes subalternos establece (art. 215) las de reclusión subalterna a muerte en unos casos, y en otros solo aquella, y para los meros ejecutores respectivamente (art. 216) las de prisión mayor a reclusión temporal en su grado mínimo o la de prisión mayor.

La pena impuesta en el bando a los rebeldes armados o que arrijen las armas, es de todo punto diferente de la que se hallaba previamente establecida por la ley: la infracción del art. 31 de la Constitución es, por tanto, manifiesta.

Y como este mismo artículo previene, que ni la ley de suspensión de garantías, ni la de orden público pueden autorizar al Gobierno para deportar a los españoles, y como en el bando de 27 de Agosto se aplica la pena de deportación para servir en Ultramar a todo faccioso preso aisladamente, siempre que no acredite que venía a presentarse, resulta evidentemente otra infracción de ese mismo artículo; toda vez que tal pena no era además, ya hemos indicado, de las que la ley aplicaba en ningún caso al delito de rebelión.

Dos contribuciones se imponen en el bando: la una consiste en el pago de cuatro mil reales por cada morzo que esté en la facción y que habrán de realizar los pueblos respectivos si aquellos no se presentasen en cierto plazo; y la otra cuya cuantía no se fija, pero que se dice será arreglada a la importancia y riqueza del pueblo, en el cual o sus inmediaciones pernócte la facción, se impone en el caso de que no se diere de ello el parte correspondiente.

Que tanto la una como la otra son contribuciones, nos parece indudable; y aun respecto de la segunda podemos establecer que tal nombre se la da equivocadamente en el bando, como emanan esas contribuciones de la voluntad de la autoridad que lo dicta, como no han sido votadas por las Cortes, ellas ni por legalmente autorizadas, claro es, que al preceptuar-se lo que respecto de ese particular se preceptuaba, se ha infringido abiertamente el art. 45 de la Constitución cuyas palabras hemos copiado literalmente.

En el bando de 30 de Agosto no se encuentran las contravenciones a la Constitución que hemos señalado en el anterior, pero existe otra no menos importante. Enun art. 2.º se declara, que los delitos militares, además de los marcados en la ley de orden público, los varios hechos que en el mismo artículo se enumeran, y como consecuencia de tal declaración se sujeta a los autores, cómplices y encubridores de tales delitos a los consejos de guerra ordinarios constituidos con arreglo a la ordenanza, y se les manda aplicar la pena de muerte.

No creemos necesario descender al examen de cada uno de esos hechos en particular, para demostrar que se hallan castigados en la ley penal, y que por lo mismo en tesis general no les corresponde el carácter de delitos militares que se les atribuye: el mismo bando demuestra que la ley de orden público no los clasifica como delitos militares, y precisamente por esto se ha estimado necesario atribuirles tal carácter.

Basta esto para que consideremos suficientemente probado que el bando, se ha infringido el art. 41 de la Constitución, tanto porque se atribuye al conocimiento de las causas que se forman con motivo de esos delitos a los consejos de guerra ordinarios, como no son aquellos a quienes correspondía decidirlos con arreglo a las leyes preexistentes, cuanto porque la sustanciación de esas mismas causas había de ser distinta de la que debiera ser, y porque a todos los responsables de semejantes delitos, ora sean autores, ora cómplices, ora meros encubridores, se mandó aplicar una pena que la ley vigente, a la sazón, solo tenía establecida para aquellos.

No cabía por lo tanto dentro de las facultades del capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra, aun considerado bien y legalmente hecha la declaración de estado de guerra, aun estimando aplicable en aquel territorio la ley de orden público dictar las diferentes medidas que sus bandos comprenden y que hemos enumerado.

Decretar las penas y las contribuciones que acordó; alterar la calificación de los delitos y por tanto variar la competencia de los tribunales y sustituir un sistema de procedimientos a otro, constituyen otras tantas violaciones claras y terminantes de los preceptos constitucionales que subsisten en vigor y son aplicables, aun en el caso de estar en suspenso las garantías establecidas por la ley fundamental.

Para concluir de examinar bajo todos sus aspectos la cuestión de que nos ocupamos, nos resta indicar que la apreciación legal de los actos del capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra, hay que buscarla en el Código penal de 1858, puesto que era el único vigente cuando publicó sus bandos de 27 y 30 de Agosto último, los arts. 307, 313 y 326 de ese Código, son los que en nuestro concepto tienen aplicación.

El Código reformado, es más explícito en la enumeración de los hechos punibles que se refieren a la materia de que nos ocupamos; pero no cabe invocarlo, por la consideración que hemos apuntado, y tampoco es aplicable su penalidad, por ser en este particular más severo que la del Código antiguo.

SEGUNDO.

Resuelta la pregunta anterior en sentido negativo, ¿ha incurrido el capitán general en responsabilidad, ya por la declaración de estado de guerra, ya por las demás disposiciones que contienen dichos bandos?

CONTESTACION.

En rigor, lo más esencial de esta pregunta queda ya contestado al dar solución al punto primero.

Resuelto que el capitán general de las Provincias Vascongadas no ha podido legalmente dictar sus bandos de 27 y 30 de Agosto último, la consecuencia lógica es que ha incurrido en responsabilidad, porque no hay transgresión legal que no traiga en pos de sí la responsabilidad del que la comete.

Puede, sin embargo, eximirse de ella el capitán

general, atendiendo que el Gobierno que tolera y aprueba sus actos lo asume?

No vacilamos en contestar negativamente, teniendo en cuenta solo el derecho constitucional, y cualesquiera que sean las opiniones particulares que sobre la bondad del sistema abrigue cada uno de los firmantes.

La declaración de estado de guerra, la de delitos militares, la creación de los consejos, sin facultades para ello, son infracciones manifiestas, claras y terminantes de la Constitución, según queda demostrado.

La de 1869 está basada sobre el principio del derecho individual, y en contraposición al de la responsabilidad judicial. Expresamente previene en su art. 30 que para las infracciones manifiestas, claras y terminantes de los preceptos constitucionales, el mandato del superior no exime de responsabilidad a las autoridades inferiores.

Y si el mandato previo y expreso del Gobierno no exime, menos ha de eximir el mandato tácito o posterior que nace de la tolerancia o aprobación. La tolerancia y aprobación podrán ser causa de tolerancia y aprobación para los superiores que toleren y aprueben; pero sin que por ella se libere la autoridad inferior que ha obedecido lo que debiera desobedecer, según las leyes fundamentales.

Y si no permite la Constitución que la responsabilidad gubernamental sustituya a la privada, menos permite un cuerpo legislativo o un bill de indemnidad, que viene a ser un voto de absolucion por infracciones de sus mismos preceptos.

Toda infracción constituye un delito: el asumir el Gobierno la responsabilidad del acto, es tan solo declararse co-autor del delito. A los tribunales corresponde exclusivamente la potestad de aplicar las leyes penales, según el art. 91 de la Constitución y exclusivamente por lo tanto ha de corresponderles el conocimiento de los casos en ellas comprendidos.

Un bill de indemnidad no es más que una declaración de que un Gobierno no es justiciable, aunque haya infringido las leyes.

Pero la absolucion decretada por las Cortes no impediría que la causa contra el capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra, se siguiera y fallase por el juez competente; porque esta es cabalmente la gran novedad que introduce el art. 30 de la Constitución.

Y aun en el caso de que se estimase dentro de los principios fundamentales de la Constitución, el que una declaración política de las Cortes libere de responsabilidad al ministro que expresa o tácitamente hubiese asumido la del capitán general y a éste y a las demás autoridades subalternas se las considere en virtud de aquella declaración igualmente irresponsables, las causas instruidas serían nulas en su origen, y nulamente formadas, aunque se pudiese declarar no penable al Gobierno trasgresor de la ley, sobreponiendo en circunstancias de la justicia; la declaración general a la inflexibilidad de la justicia; pero nunca se habría de sancionar, en perjuicio de tercero como justo lo injusto, y como válido lo que se ha hecho contra el precepto expreso de las leyes y contra las garantías constitucionales.

TERCERO.

En el mismo supuesto, ¿constituyen los actos de dicha autoridad delito común o de un militar, o delito puramente militar, y cuál es en cualquiera de estas hipótesis su naturaleza y calificación?

CONTESTACION.

Los actos del capitán general de las Provincias Vascongadas que calificamos anteriormente, considerándolos comprendidos en los artículos citados del Código penal, no son delitos militares, porque no se han cometido en el servicio de las armas, ni sobre objetos a ellas referentes, ni de ellos tratan las Ordenanzas del ejército.

El capitán general no ha publicado los bandos de 27 y 30 de Agosto, en virtud de las facultades que le conceden aquellos y que se limitan a cosas puramente militares: los ha publicado invocando los poderes que el estado de guerra pone en su mano, y en virtud del carácter de suprema autoridad con que le reviste.

Los bandos los da por lo tanto como autoridad civil extraordinaria y suprema, y en tal concepto no puede cometer delitos militares, sino delitos comunes, aunque los cometa con ocasión de ser Capitán general, destino que le da capacidad para ser autoridad única.

Serían, pues, delitos comunes perpetrados por un militar.

En idéntico caso se hallarían los actos ilegales de los consejos de guerra entendiendo y fallando las causas, y los de los Gobernadores aplicando las disposiciones de los bandos, si, como creemos, cabe por ellos responsabilidad al Capitán general, según el artículo 12 del Código; pues en aquellos ha obrado como Juez y en estos como autoridad gubernativa.

CUARTO.

Puesto caso que no se encontrase en el Código penal de 1850 disposición alguna aplicable de una manera directa y concreta, podrían serlo las del Código penal reformado en 1870, en razón a la continuidad de las consecuencias de aquellos bandos, esto es, a los procedimientos y juicios que, si bien autorizados por los bandos, tuvieron principio, o consecuencia, o prosecucion o término después de la promulgación de la Novísima ley penal?

CONTESTACION.

Hemos dicho antes que los actos del Capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra se hallan comprendidos en las disposiciones del Código penal de 1850, y también lo están en su generalidad los procedimientos y juicios incoados antes de la promulgación del Código del 70.

Para determinar si han de aplicarse los artículos del uno ó del otro Código, es necesario tener presente que cada causa que se incoó, cada fallo que se dictó, cada condena que se puso en ejecución, es un delito distinto que se comete cuando se ejecuta: el bando será la causa determinante para cometerlo; pero como la responsabilidad de los subalternos consisten haber obedecido indebidamente, no nace hasta el momento en que se obedece: por ello su fecha no puede considerarse que es la del bando en cuya publicación no han tenido parte ninguna las autoridades inferiores, sino la fecha del acto propio que, considerado delito, los hace irresponsables.

Han de aplicarse, pues, los artículos del Código penal de 1850 a todos aquellos actos que, estimados ilegales, se hayan cometido hasta el día en que fué promulgado el de 1870, y los de este a todos los cometidos posteriormente; no olvidando que siempre que por el Código de 1870 se disminuya la penalidad, las disposiciones de este han de aplicarse aun cuando la comisión del acto penable sea anterior a la publicación del Código.

QUINTO.

Si el citado Capitán general de las Provincias Vascongadas ha incurrido en responsabilidad criminal por la publicación del bando y las autoridades judiciales y gubernativas por los actos que han ejecutado en obediencia del mismo, ¿qué clase de acción puede ejercitarse: popular, pública ó privada? ¿Para incoar el procedimiento se requiere fianza ó algún otro requisito ó condición preliminar?

CONTESTACION.

Los delitos públicos no pueden quedar impunes por el mero desistimiento de la parte agraviada, porque además del daño particular que se causa al individuo, comprenden el daño social que se causa a la colectividad.

Todo ciudadano como tal tiene interés en el buen régimen de la república, y la ley ha de concederle derecho para que pueda defender ese interés y medios para que realice su derecho. La ley 2.ª, tit. 4.º, partida 7.ª basada esencialmente en estos principios,

concede el derecho de acusación a todos los españoles.

Pero este derecho tiene restricciones cuando ha de ejercerse contra las autoridades, según la clase de las autoridades a quienes se acusa y a la de los delitos de que se las acusa.

El de usurpación de atribuciones cometida exclusivamente por el general de las Provincias Vascongadas, y los cometidos por las autoridades gubernativas y judiciales, aplicando el bando; son delitos públicos y como tales dan acción pública a todos los ciudadanos para entablar la acusación; por consiguiente, la tienen los agraviados para ejercitar su acción individual coadyuvados ó coadyuvantes del ministerio fiscal.

Los delitos que hayan cometido las autoridades civiles y militares del orden judicial en el ejercicio de su cargo, dan acción popular contra las mismas: tal creemos que es la inteligencia que ha de darse al art. 98 de la Constitución conforme con el 235 de la de 1812, y por lo tanto la dan contra el capitán general de las Provincias Vascongadas por la responsabilidad que en ellos le quepa.

Y si la acción popular se da taxativamente contra los delitos de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus cargos; de esta limitación se deduce, que no se da acción popular contra los delitos que reconocen su origen en medidas gubernativas ó militares; porque la inclusión de unos es la exclusión de los demás, porque al prevenir la Constitución que se da acción pública (con cuyo nombre designa la popular en nuestra opinión) por los delitos que contra los derechos individuales cometen los Jueces y los Magistrados, se deduce que no se da por los mismos delitos que cometen las autoridades militares y gubernativas.

De estos antecedentes se infiere; que para encausar a los Jueces y Magistrados, no es necesario que el acusador preste fianza ni caución de ningún género, pues aunque, como requisito previo para admitir la acusación de los particulares, la exija contra aquellos el art. 73 del reglamento provisional de justicia; quedó derogado implícitamente por el artículo 98 de la Constitución, que concede a todo español acción popular para perseguir los delitos del poder judicial; y la acción popular no reconoce limitación ni cortapisas en su ejercicio.

De la misma doctrina se deduce que para admitir a los particulares, aunque sean los inmediatamente agraviados, la acusación que interpongan contra el Capitán General de las Provincias Vascongadas y autoridades militares y gubernativas, es indispensable la prestación de la fianza; porque la acción que se ejercita no es popular, sino pública en su sentido estricto, y el art. 94 del reglamento provisional dispone: que en las causas que siga el Tribunal Supremo contra los funcionarios por culpas ó delitos cometidos en el ejercicio de su respectivo cargo, se observen las disposiciones del art. 73 y una de las que comprenden este artículo es la prestación de fianza por el acusador, extensiva a las causas que se sigan ante el Consejo Supremo de la guerra; porque además de que la razón de la ley es la misma y la diferencia de tribunales ante el que se deduce la queja no la afecta en cosa alguna, por real decreto de 41 de Octubre de 1836, se mandó que el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en la instrucción de pleitos y causas se arreglase a lo dispuesto en el reglamento provisional para la administración de justicia.

SIXTO.

En lo que atañe a los particulares, ¿hay algún remedio legal que puedan utilizar los procesados ó condenados, ya para que se sobreseen sus causas, ya para arrancar el conocimiento de ellas de la autoridad militar, ya para conseguir la revisión ó nulidad de los fallos de los consejos de guerra, ya, en fin, para obtener la reparación de los perjuicios de todo género que se les han irrogado, y en caso afirmativo, dónde y contra quién puede ejercitarse?

CONTESTACION.

Para sobreseer las causas como medida general no hay medio: a los que se le supone reos de un hecho penable ha de procesarseles; el sobreseimiento ha de ser el resultado de la causa que demuestre la no existencia del delito ó su inculpabilidad. El que las actuaciones sigan por un tribunal incompetente, dará derecho a los procesados para reclamar que se les juzgue por sus Jueces naturales, pero no para que se sobreseen sus causas.

Ya que no sobreseerlas, ¿podría arrancarse el conocimiento de ellas a la autoridad militar?

Prescindiendo de por ahora de la cuestión de incompetencia, y considerándolas como legales pero incompetentes para conocer en los delitos que sin serlo se han declarado militares, y en tal concepto se han sometido a su jurisdicción; solo puede arrancárselas el conocimiento del proceso promoviendo la cuestión de competencia.

Si no han contestado los reos todavía la acusación fiscal, pueden en la causa misma proponer la declinatoria y acudir ante el Juez competente para que entable la inhibición, siguiéndose los recursos por todos sus trámites.

Pero contestada la acusación fiscal sin promover la excepción de incompetencia, el conocimiento seguirá en los tribunales militares según las reales órdenes de 30 de Marzo de 1827, 8 de Setiembre de 1830 y 30 de Marzo de 1831, que solo permiten cuestiones de competencia, antes de que las causas se hallen en tal estado.

¿Existe algún remedio legal para conseguir la revisión ó nulidad de los fallos?

Para contestar a esta pregunta, necesario es que nos hagamos cargo de la ilegalidad de los consejos de guerra.

La incompetencia del que juzga puede ser absoluta ó relativa: absoluta, cuando el Juez carece completamente de jurisdicción, y no es Juez más que en el nombre, y en el poder material para ejecutar sus fallos, que ante la ley no tienen fuerza ninguna; relativa, cuando al Juez no le está encargado por la ley entender en el negocio de que conoce, pero tiene alguna jurisdicción, y entónces sus procedimientos y sentencias son válidas; porque la jurisdicción que le falta la adquiere por la tácita prorrogación del que no reclama en tiempo, si viene prorrogable por su naturaleza. Toda jurisdicción viene del poder supremo, y el que sea juzgado los reos por tribunales competentes, es a manera de privilegio renunciable; cuestión de procedimiento que no varía la esencia de los poderes judiciales, que abraza un círculo más ó menos extenso; pero que en todas sus manifestaciones no son más que irradiaciones de un mismo foco.

Si los consejos de guerra fueran tribunales establecidos con arreglo a las leyes, sus decisiones incompetentes en su origen, habrían quedado legalizadas por la sumisión de los reos; pero los consejos creados en virtud de facultades que concede al Capitán general la declaración legítima de quedar el territorio en estado de guerra, son en nuestro concepto radicalmente ilegítimos, si su creación es la consecuencia de una declaración de estado de guerra hecha ilegalmente, como la promulgada por el Capitán general de las Provincias Vascongadas.

Los consejos son incompetentes con incompetencia absoluta Juzgaron en virtud de una jurisdicción que les concedió quien no la tenía, y que por tanto nunca adquirieron: sus sentencias son hechos, no derechos: nulas, esenciales y radicalmente.

La adquisición de los reos no puede concederles jurisdicción prorrogada, porque para que se les prorrogase era necesario que tuviesen alguna: lo que no existe, no es susceptible de prórroga.

La sumisión expresa ó tácita de los reos no válida lo que es originariamente nulo. No es válido el juicio, dice la ley 12, tit. 22, partida 3.ª, si alguno juzgase no le siendo otorgado poderío de lo facer. Y esta doctrina está confirmada por la 45 del mismo título, aun tratándose de la sentencia de un Juez con incompetencia relativa; afirmando los comentaristas al glossar la 5.ª, tit. 6.º, partida 7.ª, que en los delitos que producen infamia, y para los que

el único competente era el Juez ordinario, no la producía la sentencia del incompetente, aunque éste fuera el Rey ó el Emperador.

Las leyes por lo tanto no reconocen la nulidad esencial, niegan el carácter de sentencia a la dictada por el Juez incompetente en absoluto, y los juristas constitutos enseñan que la nulidad cuando es notoria por falta de jurisdicción, puede reclamarse perpetuamente.

¿Ha sido derogada esta legislación? No sería dudoso si el recurso de casación criminal se hubiese extendido a los juicios criminales militares, puesto que allí se menciona la incompetencia de Juez; a un cuando entendemos que se refiere a la incompetencia relativa; pero no estando comprendidas en aquel, queda vigente para estos la antigua legislación basada en los principios de la ciencia, basada en la naturaleza del derecho, basada en la razón natural que enseña que pueden darse sin efecto en todo tiempo los actos de un poder completamente legal; y que en todo tiempo ha de ser permitido reclamar y protestar y rechazar el fallo apoyado tan solo en la fuerza irresistible de un poder de hecho, sin arraigo en ley alguna.

Podría, pues, pedirse la nulidad de las sentencias acusando conjuntamente al Capitán general de las Provincias Vascongadas y a las autoridades que le hubiesen obedecido; y al mismo tiempo, como consecuencia de la sentencia condenatoria, que se declarasen nulos todos los procedimientos seguidos a los procesados.

Podría también, si se incoase separadamente la causa contra el Capitán general, la usurpación de atribuciones; al reclamar cada reo contra el Consejo que le hubiese sentenciado, pedir al mismo tiempo que se declarase la nulidad de la sentencia; nulidad que implicaría y forzadamente entrañaría las condenas del Capitán general y la del consejo de guerra.

Hemos consignado nuestra opinión, partiendo de la que abrigamos respecto a la incompetencia absoluta de los consejos de guerra: en la hipótesis de que su creación se declarase legal, y por lo tanto, que su incompetencia fuese relativa por haber concurrido y fallado como delitos militares los que no lo eran, según la ley de orden público; no encontramos recurso alguno en nuestra legislación para que las causas falladas se revisen ó se declare la nulidad de la sentencia.

Y no obsta a esto la real orden de 25 de Junio de 1840, que al contestar a la duda de si los secretarios y fiscales de los consejos de guerra permanecían o no de jurar ó no, responde que no; porque no se declara la nulidad de las causas en que faltase tal requisito, resultaría graves é irreparables perjuicios a la recta y pronta administración de justicia. Ciertamente que presupone que las causas seguidas en consejo de guerra pueden anularse, y como se trata de irregularidades de procedimiento, no de incompetencia de Juez, es claro que la nulidad de lo que de ello resultase podría declararse por el Capitán general antes de aprobarse el fallo, ó por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en su caso, con arreglo a la real cédula de 12 de Febrero de 1816, que cometió el conocimiento de los consejos de guerra al Consejo de Guerra y Marina, atribuciones que, con la de resolver las dudas que ocurriesen en la aplicación de las leyes, ordenanzas y reglamentos a un caso particular, trasladó al Tribunal Supremo de Guerra y Marina el real decreto de 31 de Julio de 1835, y al Consejo Supremo de la Guerra el de 6 de Diciembre de 1868 y otros posteriores.

Pero aquí existe el óbice de que el Capitán general, no solo no reconoce las irregularidades, no solo no conviene en ellas, sino que es su autor; que las causas quedan ejecutoriadas con el fallo del Capitán general; que no se ha acudido en tiempo al Consejo Supremo de la Guerra para que declare la nulidad por incompetencia, y que suponiendo que pudiese acudirse aun en algunas causas, sería en su último resultado dejarse al arbitrio de resolver la cuestión de competencia, cuando su resolución no le pertenece por tenerla encomendada las leyes al Tribunal Supremo de Justicia.

Ciertamente que mientras no haya autoridad judicial civil que reclame, no puede decirse que se trata de una competencia, sino simplemente de una declinatoria de jurisdicción, y toda autoridad puede declinarla, cuando cree que no le pertenece el conocimiento del negocio en que entiende, sin que implique usurpación de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia; pero admitiendo esta razón como suficiente, tropezaríamos con dificultades prácticas, unas mediatas, otras inmediatas. Las mediatas, que como los fallos de los consejos no han subido al Supremo de la Guerra, porque sin duda el Capitán general y el Auditor han estado conformes; no puede ahora aver el conocimiento de las causas y conocer de ellas, mucho mas, cuando ya ejecutoriadas por la aprobación del Capitán general, carece el Consejo de facultades para anular sentencias ejecutoriadas. Dificultades inmediatas: que la validez ó nulidad de las causas dependiera de la declaración de nulidad ó validez de los bandos del Capitán general que creó los tribunales y clasificó ilegalmente los delitos; que siendo antes, declarar la ilegalidad de los bandos, de los consejos de guerra y de la clasificación de los delitos; que unas las causas, consecuencias de estos abusos; mientras no se resolviese la ilegalidad de aquellos, el Tribunal Supremo no entraría en el fondo de la cuestión, y por la resultancia actual; decidiría la legalidad de las sentencias.

Parece que siguiendo el espíritu de nuestra legislación, debería poderse casar por el Tribunal Supremo de Justicia: así lo persuade la razón del establecimiento del recurso. No puede admitirse en buenos principios que estén menos garantidos los derechos individuales que consagra la Constitución en favor de todos los ciudadanos, cuando los ataca el Juez ordinario, que cuando los ataca el Capitán general; que haya recursos eficaces contra los abusos del poder civil, y ninguno se encuentre contra la violencia del poder militar.

Reconociendo como supremo el Tribunal de Justicia, debiendo fallar las competencias de jurisdicción, pudiendo casar las sentencias del de Guerra y Marina, por la ley del 38, arbitro inapelable para entender las infracciones del derecho esencial y de las formas de los procedimientos criminales; a él debería lógicamente y forzadamente corresponder el conocimiento de todas las que se cometan, bien provengan de la autoridad civil, bien provengan de la autoridad militar.

Pero el recurso de casación en materia criminal se ha dado solo, según su artículo 1.º, contra los fallos de las Audiencias; es decir, para los tribunales civiles, y no para los tribunales militares; y si por la razón de la ley pudiera comprenderse a todos, la letra lo prohíbe: jurisdicciones especiales no están sujetas sino a disposiciones especiales.

Más aun comprendiendo todas las sentencias, sus efectos por fuerza habrían de ser limitados; no habiéndose propuesto la incompetencia antes de contestar la acusación ni reclamados en otra forma, no podría darse lugar al recurso de casación por tal falta, con arreglo al art. 6.º. Cabría, sin embargo, fundándolo en los párrafos 4.º y 3.º del art. 4.º, contra las sentencias que hubiesen impuesto a los reos, penas no marcadas en el Código, como infracciones del art. 31 de la Constitución, y de los artículos 23 y 24 de la ley de orden público, que prohíben a las autoridades militares, establecer otra penalidad que la prescrita previamente por la ley; y cabría también contra las sentencias que hubiesen recaído contra paisanos acusados de delitos militares, declarados tales en los bandos, con absoluto desprecio de la ley de orden público que en sus arts. 27 y 28 los determina taxativamente.

Por otro lado, este recurso solo podría entablarse no habiendo transcurrido los plazos marcados en la misma ley y en la mayor parte han transcurrido; puesto que se hallan sufriendo condena los procesados.

Quizá pudiera dudarse si respecto a los tribunales militares, ya que el recurso de casación no les alcanza, subsiste vigente el extraordinario que permitían las antiguas leyes, de acudir al Soberano para que mandase rever el proceso a los mismos tribunales sentenciadores, ó a otros, según lo considerase más conveniente; pero este medio quedó abolido por la real orden de 21 de Marzo de 1834, que prohibió se diese curso a las instancias que versasen sobre obtener revisiones extraordinarias, ó abrir juicios ya fenecidos; y por el art. 243 de la Constitución de 1812 vigente con arreglo al decreto de las Cortes de Setiembre de mil ochocientos treinta y siete, según el que en las Cortes ni el Rey podrán en ningún caso ejercer funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos. (Reales órdenes del 39 y de 44.)

Esta es la buena doctrina, por más que en algunos casos que reúna condiciones especiales por referirse a las provincias de Ultramar, hayan prevalecido opiniones distintas.

No vemos, pues, recurso alguno, si se estimasen legítimos los consejos de guerra, para que las sentencias dictadas con incompetencia relativa originaria por reos sobre delitos no militares ajenos a su jurisdicción; pero con competencia posterior por la sumisión de los reos, se revocan ó anulen; porque el indulto sancionaria su legalidad, aunque remitiese la pena en todo ó en parte; y el recurso de responsabilidad contra los consejeros de los de guerra, que en virtud de los bandos del Capitán general hubieran impuesto penas mayores que las marcadas en el Código, produciría quizá la condena, sancionando que la sentencia era injusta; pero no nula ni revocable.

Más fácil es de contestar la pregunta respecto a la reclamación de daños y perjuicios: lo mismo los procesados que los condenados judicialmente, que los vejados por medidas gubernativas, al instar las causas contra los que les han sentenciado ó vejado, pueden exigir de ellos la indemnización, de las pérdidas sufridas. Dicho se está que estas reclamaciones seguirán la suerte de la principal, y que si los acusados fuesen absueltos no quedasen sujetos a responsabilidad civil de ninguna clase.

De todo lo dicho debemos concluir: que la incompetencia absoluta de los consejos de guerra es patente; la nulidad de sus sentencias, incontestable; que la casación en cualquiera de las sentencias nulas por absoluta incompetencia de los jueces, está consignada en nuestra legislación y jurisprudencia, y que ha de reclamarse ante los Jueces a quienes las leyes facultan para declarar la culpabilidad de los que se abrogaron atribuciones y jurisdicción que no les correspondían, siendo también responsables de los daños y perjuicios causados; pero que si los consejos de guerra se considerasen legalmente creados, no hay recurso ninguno para pedir la revisión ó nulidad de sus sentencias por haber conocido de delitos no sujetos a su jurisdicción: es impuesto penas mayores de las debidas; aun cuando por lo último pudiera procesarseles como infractores de la ley fundamental del Estado.

SÉTIMO.

Si fuera cierto que en las provincias civiles de Burgos y Logroño no se ha publicado ningún bando que declare el país en estado de guerra, ¿que calificación merecería el hecho de estar conociendo la autoridad militar en las causas llamadas de rebelión, asumiéndolas no obstante las reclamaciones de los tribunales, es necesario para calificar este hecho tener en cuenta los casos diversos que puedan ocurrir.

Suponemos que aun cuando no se haya declarado en estado de guerra las Provincias, las autoridades militares obrarán así por mandato del capitán general, que se ha establecido consejos de guerra como en las Provincias Vascongadas, que unos juzgados habrán resistido la invasión de sus atribuciones, y otros no, y que unos lo habrán resistido antes, otros después del código del 70.

Si el Capitán General ha mandado, como es de creer, que se establezcan consejos de guerra para conocer de las causas de rebelión, haya señalado ó no penalidad especial y arbitraria, este acto es una usurpación de atribuciones castigada en el art. 307 del código del 50, y en el 388 del que rige en la actualidad.

Las autoridades militares que hayan sentenciado incompetentemente a los reos, habrán infringido los artículos 291 del antiguo código, y 203 y 306 del moderno. Deberán tenerse presentes en su caso los artículos 292 y 293 del código de 1850, y el 203, 207 y 208 del que rige, para pedir la pena contra las autoridades militares que hayan reclamado, y contra las judiciales que no hayan resistido la indebida entrega de las causas y de los reos.

Aun cuando el mandato del General, y para ceder los Jueces, la circular reservada del Ministro de Gracia y Justicia, que se dice existe, prohibiendo entablar competencias y cuyo texto no se conoce; tratándose como se trata de infracciones claras de los preceptos constitucionales, la obediencia no les excusa, porque no es debida según el art. 30 de la Constitución.

Los remedios para evitar la prosecución del conocimiento, pedir la nulidad de los fallos y reclamar perjuicios, son los mismos consignados al contestar la anterior pregunta.

Madrid, 27 de Diciembre de 1870.—M. Cortés. —L. Díaz Pérez.—José González y Serrano.—Lic. Cándido Nueceda.—Grisol Álvarez.—Lic. Valeriano Cárqueva.—Lic. Manuel Alonso Martínez.—Lic. Carlos Especeda.—Leon Galindo y de Vera.

PORTES CONSTITUYENTES.

Extracto de la sesión celebrada el día 27 de Diciembre de 1870.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DON MANUEL RUIZ ZORRILLA.

Abierta la sesión a las tres se leyó y aprobó el acta de la anterior.

El señor marqués de FIGUEROA pidió que constase su voto conforme con el de la minoría en la votación de anoche.

El Sr. CALDERON HERCE pidió que se pusieran sobre la mesa todas las enmiendas desechadas sobre incompatibilidades para el día en que se discutía el dictamen de la comisión.

Se aprobó sin debate el acta de Castellón de la Plana, y fué proclamado dictamen el Sr. Buñón.

Se puso a discusión el dictamen sobre el proyecto de ley de ceremonial para el juramento del monarca.

Se leyó el voto particular del Sr. Carvera, y no habiendo quien pidiera la palabra se desechó sin debate.

También sin debate se aprobó el dictamen de la mayoría de la comisión.

Se puso a discusión el proyecto de ley acerca de la dotación de la casa real.

El Sr. BUGALLAL usó de la palabra en contra, é hizo consideraciones generales sobre la obra revolucionaria de Setiembre, censurando lo que se había hecho en el orden intelectual, en el orden moral y en el orden administrativo.

El señor presidente del CONSEJO usó de la palabra, diciendo que el Sr. Bugallal había querido hacer un cargo al ministro de la Guerra, que no había hecho por no quebrantar la autoridad en el ejerci-

cio de dicho ministro, tan necesaria en esta difícil crisis.

El general Prim dijo que él había sido todo lo justiciero que le era posible, y que deseaba formularse el Sr. Bugallal sus cargos ó levantase la reticencia.

Aseguró que el Gobierno tenía firme voluntad de cumplir la Constitución y las leyes; pero que en la actitud en que están los federales y carlistas, que saltan por encima de la ley y están dispuestos a alzarse con las armas era la mano, el no dejará que arda la patria y se pierdan las libertades, tan costosamente conquistadas, por respetar estrictamente tal ó cual artículo constitucional.

El Sr. BUGALLAL reafirmó, diciendo que el *salus populi* volvía a aparecer como regla de conducta del Gobierno, sancionándola con su autorizada voz el presidente del Consejo.

Aseguró que él no había hecho ninguna reticencia, sino que había hecho una reserva de tratar más adelante la gestión del ministro de la Guerra, en lo cual no había ofensa alguna a S. S.

El señor presidente del CONSEJO dijo que él no sabía si sería ministro ó no dentro de pocos días, pero siguiendo las prácticas constitucionales, el ministerio presentará su dimisión al rey, y si este le encarga la formación de un nuevo ministerio, obedecerá las órdenes de S. M., aunque su más vehemente deseo era dejar el sitio que hoy ocupa, habiendo consagrado su vida a conquistar y restaurar la libertad para todos, quedando él en esclavitud, porque tal era la de no poder abandonar el puesto que desempeñaba en virtud de razones de Estado que no podían desconocerse.

El Sr. NAVARRO y RODRIGO, como de la comisión, contestó al Sr. Bugallal, diciendo que sus censuras a la obra revolucionaria eran injustas.

Refiriéndose al proyecto de ley que se discute, dijo que la cifra de dotación de la corona era la natural, la lógica y la digna, inferior a la que tienen los monarcas de otros países, comparadas las cifras de sus presupuestos.

El orador, después de hacer la defensa de la dotación, pasó a fijar cuál era la posición de los hombres conservadores, y cuáles los deberes de las clases conservadoras en el caso de que la batalla se empeñase entre la demagogia y el poder.

Y como según el orador solo había escollos y abismos por todas partes, fuera de la legalidad constituida, era evidente que las clases conservadoras se hallaban en el deber de ayudar a salvar la Constitución y la nueva dinastía.

Y terminó, expresando su esperanza de que todos los hombres de la revolución que han creado la nueva dinastía, se agruparían bajo la bandera liberal y constitucional; a fin de consolidar su obra y sacarla a salvo de los embates de la demagogia.

El Sr. LASALA declaró que no votaría el proyecto, porque, consecuente con sus ideas, creía excesiva la dotación, dada la situación del Tesoro.

El Sr. PINEDO de la comisión, defendió que lo consignado era lo menos posible, y mucho menos si se comparaba con la dotación anterior.

Fué aprobado el proyecto por 113 votos contra 8.

Le-yóse el proyecto de ley modificando un crédito con destino a material de los edificios de instrucción pública, y otro para el establecimiento de un cable telegráfico que una a Canarias con la península.

Se levantó la sesión, acordándose que no la hubiera esta noche.

Eran las seis y cuarto.

PARTE EXTRANJERA.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS.

(De la Agencia Fabra.)

La Gaceta de hoy no publica ningún despacho oficial del teatro de la guerra.

(De la Agencia Fabra.)

Burdeos, 27 (a las nueve y cincuenta minutos de la mañana).—Un telegrama fechado del Havre el 26, dice que el enemigo, no respetando el derecho de los neutrales, acaba de sumergir seis buques ingleses en Duclair (departamento del Sena inferior) con objeto de obstruir el Sena.

Ha disparado sobre tres de estos buques. El segundo de uno de los buques ha estado a punto de ser muerto.

Este hecho grave ha conmovido al consúl inglés. Un telegrama de Saint-Catali, fechado el 26, dice que 500 ó 600 prusianos han entrado en dicha ciudad después de haber disparado granadas.

Han puesto una contribución de 20,000 francos y se han retirado por la noche.

Londres 27.—El *Daily News* publica noticias fechadas el 24 en Margency, según las cuales hubo un gran caudone que duró desde media noche hasta la mañana. El fuego dirigióse incesantemente sobre las posiciones prusianas.

Bourges continúa en poder de los franceses. Hoy se esperaba un gran ataque; pero los franceses no han hecho aún reconocimiento alguno ofensivo.

Un despacho del *Times* del 26, confirma la noticia de que los prusianos echaron a pique seis buques ingleses en Duclair, haciendo fuego sobre la tripulación a la cual desbarbaron.

D

gan las primeras a Bruselas entre cuatro y cinco de la tarde. Los obstáculos que más las detienen, son la lluvia, el viento contrario, y las aves de rapiña, pero más que nada la niebla. Como las palomas corren, sea aves del Norte, siguen difícilmente la dirección del Mediodía, por lo cual se encarga que el punto desde donde haga saltar la delegación del gobierno las palomas sea el más próximo posible a París y al Sud de esta capital.

Leemos en La Época: «Unos de nuestros amigos, que acaba de visitar la nueva capital de Francia, nos escribe diciendo que tanto en Burdeos, como en otras poblaciones, hay un deseo general de que se haga la paz a toda costa. Dúesele nuestro amigo del espectáculo lastimoso que ofrecen las ciudades y aldeas, los franciscanos y las bullanguerías de los republicanos rojos; el desahucio general. Solo se baten bien los brótones al grito de Dios y la Francia, derramando su sangre en pureza, según la frase del que nos comunica estas noticias, que tenemos por exacta.»

Solo la bandera que tremolan los legitimistas, inspira el verdadero patriotismo.

Según cartas de Rouen, la guarnición alemana establecida en las alturas que dominan el Sena, y hacia todos los preparativos que deberán haber hecho los rusos para ir a tres meses para poner la ciudad en estado de defensa. El general Manteuffel había salido para Amiens con un cuerpo de ejército cuyo efectivo no pasaba de 22 a 23,000 hombres, para ir a unirse al general Faidherbe, que no se encontraba muy bien a consecuencia de los últimos sucesos de París.

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

MADRID, 28 DE DICIEMBRE DE 1870.

ATENTADO CONTRA EL GENERAL PRIM.

A las ocho de la noche de ayer empezó a difundirse por Madrid la noticia de haberse cometido un horrible atentado contra el presidente del Consejo de ministros. Sin embargo, lo desahucio de la noche hacia que descurriera por las calles menos gente que de ordinario, y la mayor parte de la población no se enteró del criminal suceso a pesar de haberse empezado a vender a las doce de la noche un suplemento extraordinario a *El Imparcial*, en que se daba cuenta de lo muy sucintamente. Hoy este periódico con más copia de datos, aunque sin responder de su completa exactitud, refiere el hecho en estos términos:

«El presidente del Consejo de ministros salió anoche a las siete y media del Congreso, dirigiéndose en su carruaje al ministerio de la Guerra, acompañado de los ayudantes Sres. Nandín y Moya.»

Al llegar a la calle del Turco se encontraron dos coches, detenidos al final de la misma, desembocando ya en la de Alcalá.

El carruaje del general hubo de detenerse ante aquel entorpecimiento, al parecer casual, y para ver en qué consistía la detención, se asomó a la portezuela el ayudante Sr. Moya, que iba en el vidrio, mientras el general Prim y el Sr. Fernández Nandín ocupaban la festería.

El Sr. Moya vio tres hombres, vestidos con blusas, que apuntaban con carabinas o retacos, y no tuvo tiempo para decir más que: «¡Bájese Vd. mi general, que nos hacen fuego!»

Inmediatamente sonaron tres detonaciones por el lado izquierdo, y algunas otras por el derecho, las cuales se hicieron casi dentro del coche, en términos que el general Prim, tiene los granos de pólvora señalados en la cara.

El cochero, al advertir lo que pasaba, comenzó a insultar y a dar latigazos a los asesinos; castigó a los caballos y estos arrancaron bruscamente, atrapeando a los dos carruajes, que, casi en la calle de Alcalá, obstruían intencionalmente la del Turco, a fin de que el carruaje del general Prim no pudiera escapar.

Apenas había desaparecido el peligro, y cuando el coche del general se dirigía hacia el ministerio de la Guerra, el ayudante Sr. Moya preguntó a su jefe si tenía novedad, y este le contestó que se sentía tocado en la mano derecha y en el hombro izquierdo.

La distancia de la calle del Turco al ministerio de la Guerra es bien corta. Una vez en este se apearon del carruaje todos, primero el ayudante Sr. Nandín, después el general, y tras este el ayudante señor Moya. Subieron a las habitaciones, y se vio que el presidente del Consejo tenía una herida de consideración en la mano izquierda, por virtud de la cual hubo que amputarle inmediatamente la primera falange del dedo anular, y una metralloza en el hombro izquierdo. Describimos metralloza, porque se conoce que le dispararon algunos trabucos, uno de los cuales le sepultó ocho balas en el mencionado hombro izquierdo.

El general Prim subió con gran entereza la escalera del ministerio, apoyándose en la barandilla con la mano derecha herida, y dejando impresa en aquella varias huellas de sangre.

Al encontrarse con su señora la dijo sin afección que iba ligeramente herido. Inmediatamente se buscaron facultativos; acudió primero el doctor Vicente, que le examinó y curó las heridas del hombro, y después fue el médico Sr. Losada, que le hizo una cura más radical, habiéndosele extruido hasta las dos de la mañana siete balas del hombre. El general tiene la cara ensangrentada, y probablemente habrá que amputarle el dedo índice de la mano derecha, en la cual llevaba el bastón.

Los disparos se hicieron desde ambos ángulos de la calle del Turco, o mejor dicho, casi desde la calle de Alcalá. Uno de los coches que obstruían el paso fue derribado por el del presidente del Consejo.

El ayudante Sr. Moya, después que dejó a su jefe al lado de su señora, se encontró con el Sr. Nandín en la antecámara; le preguntó qué tenía, y este le enseñó la mano derecha, envuelta en un pañuelo, completamente destruido. Sobrevino acto seguido una abundante hemorragia, y el Sr. Nandín fue trasladado a la casa de socorro de la calle de Fuencarral, en donde se encuentra todavía. Allí se le hizo la primera cura, y hoy a las diez de la mañana habrá junta de médicos para ver si se le corta o no la mano.

Nada más se sabe positivamente. Con un fundamento de verdad que no nos atrevemos a garantizar, se asegura que los asesinos tenían caballos apostados en el Prado; que tan pronto como consumaron el crimen echaron a correr hacia donde aquellos estaban, de los cuales se apoderaron, marchándose a escape no sabemos dónde. Por igual conducto, es decir, sin que tampoco garantemos la noticia, oímos anoche que una pareja de veteranos, de guardia en la Cibeles, se enteró del atentado en el acto de cometerse, y que no pudo aprehender a los asesinos, porque estos montaron en los caballos que en el Prado les esperaban y huyeron precipitadamente.

A juzgar por el precedente relato puede creerse que el general Prim está herido en el hombro y en ambas manos. Sin embargo, *La Nación* y el mismo *El País*, no hablan más que de dos heridas, una en la mano izquierda, y otra en el hombro del mismo lado. *La Iberia* dice en un sueto, que el general recibió dos balas en el antebrazo y otra en la mano izquierda, y más adelante, en otro sueto, da noticias de la primera cura, y dice, que en ella le fueron extraídas al general Prim cuatro de los ocho proyectiles que le penetraron en el hombro

izquierdo y en el brazo y la mano derecha, operación que sufrió el presidente con gran entereza.

La Nación, publica las siguientes noticias acerca del estado del herido a hora avanzada de la noche:

«El general Prim, dice, que había sufrido con imperturbable serenidad la amputación del dedo herido, departía con voz entera y animado semblante con las personas que le rodeaban, siendo preciso que los médicos le advirtiesen que no era conveniente la conversación.»

Algunos momentos después parecía que había conciliado el sueño; pero no tardó en manifestar que sentía agudos dolores en la mano. La herida del hombro, donde la bala penetró hasta bastante profundidad, no le dolía tanto; mas le obligaba a conservar constantemente una postura que le hacía incómoda y molesta. Todos comprendían que el general Prim, debía sufrir más de lo que expresaban sus palabras. Los facultativos manifestaban, sin embargo, que no existía la menor gravedad.»

El Imparcial califica de graves las heridas del general Prim y de su ayudante el Sr. Nandín, y *El País* dice que el general Prim está herido, aunque no de suma gravedad.

El parte publicado en la *Gaceta* por el ministerio de la Gobernación dice así:

«El Excmo. señor presidente del Consejo de ministros ha sido ligeramente herido al salir de la sesión del Congreso en la tarde de ayer por disparos dirigidos a su coche en la calle del Turco.»

Se ha extraído el proyectil sin accidente alguno, y en la marcha de la herida no hay novedad ni complicación.»

Todos los periódicos están conformes en que los asesinos estaban ocultos, según parece, en dos coches de alquiler, y en cuatro, según *La Discusión*; que los asesinos eran seis u ocho, que al llegar al carruaje del general Prim se bajaron los asesinos para hacer fuego, rompiendo entre los cristales del coche del general, según dice algún periódico, y que, por fin, los asesinos no han sido habidos, aunque, según dice un diario, se han hecho la noche pasada algunas prisiones. Los coches en que estaban los asesinos tampoco parece que han sido detenidos. La mucha nieve que caía a la hora del atentado, la cual hacía que fueran muy pocos los transeúntes, aun por las calles principales, y aumentaba la habitual soledad de la calle del Turco, favoreció indudablemente a los criminales; pero con todo, es raro que la primera pareja de individuos de orden público que se enteró del suceso fuera la que estaba de punto en la fuente de Cibeles.

Hasta aquí, según lo que de público se dice, las principales circunstancias que concurrieron en el atentado frustrado de la calle del Turco. De las consecuencias que el hecho ha producido y puede producir en la política hablamos más adelante. Pero cualesquiera que estas sean, cerrando por decir así los ojos ante lo porvenir, ningún corazón honrado puede sobreponerse en estos momentos a las tristísimas consideraciones que naturalmente inspira el espantoso crimen de que han sido víctimas el general Prim y su ayudante el Sr. Nandín.

No hay para qué decir cuál es hoy el lenguaje de los periódicos de todos matices. En la calificación del atentado de ayer no puede haber diferencia de opiniones entre personas honradas; pero podemos y debemos hacer algo más que condenar el crimen y expresar nuestra indignación; podemos y debemos levantar el entendimiento y considerar si el atentado de anoche no será consecuencia del influjo que ejerce la predicación de ciertas doctrinas, la relajación del principio de autoridad y el empeño fatal de divorciar la política de la religión y de la moral, divorcio que produce necesariamente el menosprecio de las cosas del orden sobrenatural y tras él la desmoralización. ¡Desgraciada sociedad aquella en que el crimen no tiene freno que las leyes humanas y ciertas vagas nociones de honor!

Y a este extremo podríamos llegar en nuestra desgraciada patria si continuásemos por la senda del tiempo ha emprendida, y por la cual se aleja al pueblo de los sublimes preceptos del Evangelio. ¿No servirán ciertos hechos de enseñanza? ¿No abrirnos al fin los ojos a lo luz de la verdad, de la razón y del sentido común?

¡Querida Dios que España y los hombres que inducen en su Gobierno entren en sí mismos, mediten y aprendan!

CONSECUENCIAS POLÍTICAS.

El desgraciado accidente de que ha sido víctima el general Prim, y cuyos detalles damos en otro lugar tomándonos de los periódicos de esta mañana, ha producido por de pronto una modificación en la política, que conceptuamos muy grave.

Reunidos en Consejo anoche los ministros y los hombres más importantes de la unión liberal, se instó al Sr. Topete para que, como una de las columnas de la revolución, se encargase de suplir al conde de Reus en estos momentos críticos en que las pasiones sobrecitadas podían poner en grave peligro la situación y la nueva monarquía.

El Sr. Topete recordó las declaraciones hechas hace muy pocos días en el Congreso, en virtud de las cuales quedaba imposibilitado para mandar en el ejército, pues él afirmaba una y otra vez, que quien ha roto la ordenanza no tiene autoridad para exigir obediencia a sus inferiores. También recordó, según parece, los compromisos que le ligaban al duque de Montpensier, y manifestó temores de que, si aceptaba algún cargo importante, se creyese que quería utilizar a favor de su candidato, y si no lo utilizaba, se imaginase que había dejado de ser fiel a sus compromisos.

Realmente, la posición del Sr. Topete era bastante embarazosa, porque la conducta observada por él en estos últimos días y la solemnidad de sus declaraciones, así como su ningún afecto al duque de Aosta, de quien, según dijo en la sesión del 23, le separaba una gran distancia que no se acortaría, le tenía sujeto de pies y manos.

Los ministros, el presidente de las Cortes, el señor Ríos Rosas y el mismo general Serrano lograron convencer, no sabemos con qué razones, al Sr. Topete, que al fin se encargó interinamente de la presidencia del Consejo y del ministerio de la Guerra, aceptando en propiedad la cartera de Estado. El Sr. López de Ayala, unionista también, aunque áustino, se encargó del ministerio de Ultramar.

Al mismo tiempo, el Sr. Topete resolvió salir esta misma noche para Cartagena, en lugar del general Prim, a recibir al duque de Aosta.

Tenemos, pues, a la unión liberal dueña del poder en estos momentos, y al partido progresista, que estaba resumido en un solo hombre, en el general Prim, entregado a merced de sus encarnizados enemigos, tanto más dañinos y temibles, cuanto más próximos se hallaban del progresismo.

Hoy nos parece oportuno recordar, para que nuestros lectores formen juicio de las consecuencias políticas que puede traer el estado de salud del general Prim, un artículo publicado pocos días ha por el periódico más ardiente adversario de

este personaje y más retrógrado dentro de la revolución de Setiembre; por *La Política*.

Pedia este periódico la coalición de todos los partidos, y hasta la de todos los hombres honrados para combatir al Gobierno si el duque de Aosta nombraba su primer ministro progresista puro; mas guardaba un silencio muy significativo, y sospechoso de lo que debería hacerse si el duque de Aosta daba participación en el Gobierno a los unionistas.

Ahora bien: un accidente imprevisto ha hecho que la unión liberal se apodere de la presidencia del Consejo, del ministerio de la Guerra y del de Estado por medio de una sola persona, y de la persona, si no más entendida, más caracterizada entre los llamados conservadores de la revolución, del Sr. Topete; y además ha conquistado el ministerio de Ultramar; es decir, que tiene hoy en su mano cuatro cargos, tres de ellos, los más importantes del Gobierno.

De modo que no ha sido menester esperar las decisiones del duque de Aosta para organizar un ministerio mejor del que se imaginaban los unionistas. El duque de Aosta, al desembarcar en Cartagena, se encontrará en brazos de la unión liberal, y precisamente de aquella parte de la unión liberal que con mayor dureza y encarnizamiento ha combatido la candidatura del hijo de Víctor Manuel y la política que le ha dado el trono por 191 votos.

La importancia, la inmensa gravedad de este hecho no necesita ser notada; se comprende solo con la indicación del hecho mismo.

Por de pronto, el partido progresista ha sufrido una derrota; más aún; ha sido víctima de una verdadera catástrofe. Había abdicado sus ideas, sus aspiraciones, su poder, su vida entera en el general Prim, y al caer este personaje herido por la bala de unos asesinos, el partido progresista ha caído también.

La política personal no puede traer otras consecuencias. Todo el tiempo que dure la imposibilidad del general Prim de dedicarse a los negocios públicos, el partido progresista estará muerto. Y si el general Prim, ya a consecuencia de las heridas, ya de una enfermedad cualquiera, sucumbiese, su partido sucumbiría con él.

Otro es preguntar: por qué una monarquía democrática del duque de Aosta, cuya triste significación, cuyos graves inconvenientes han demostrado los oradores más notables del montpensierismo, ya a ser apoyada por estos mismos hombres? ¿Serán ellos capaces de querer consolidarla?

Si solo juzgásemos por las palabras de los hombres y por la lógica que de ellos hay derecho a exigir, nosotros contestaríamos rotundamente que no. Pero se trata de la unión liberal; se trata de un partido que siempre fijó sus ojos en el interés, en la ambición de mando, y nunca en la consecuencia y en la dignidad políticas. Por eso tememos que la unión liberal se encargue hoy de sustituir al general Prim, y de sustituirle en toda la extensión de la palabra.

Pronto saldremos de dudas. Entre tanto, no es posible negar que la situación revolucionaria se encuentra en su período más crítico y peligroso.

CAMBIO MINISTERIAL.

Imposibilitado el general Prim por algún tiempo de continuar al frente del Ministerio a causa de las heridas; el primer cuidado del Regente, tan pronto como se enteró anoche del estado del enfermo, fue reunir el Consejo de Ministros, al cual asistieron varios hombres políticos de las diversas fracciones de la Cámara. Resultado de esta reunión fue encargarse del ministerio de Estado en propiedad interinamente de la presidencia y del ministerio de la Guerra, el brigadier Topete; y el Sr. Ayala del ministerio de Ultramar.

Los periódicos ministeriales de la mañana nos dan algunas noticias de esta reunión, y de ellos nos valdremos nosotros para enterar a nuestros lectores de un suceso tan trascendental en la política.

El Imparcial relata así lo acaecido en el ministerio de la Guerra:

«Tan pronto como fue conocido el atentado cometido contra el general Prim, todos o casi todos los hombres de importancia en la política, diputados, altos funcionarios civiles y militares y comisiones de todos los centros políticos, acudieron presurosos a la Presidencia del Consejo de Ministros.»

Uno de los primeros fue S. A. el Regente, que se constituyó a la cabecera del enfermo para enterarse de su estado, disponiéndose inmediatamente a obrar con el Consejo de Ministros con toda la actividad y la energía que las circunstancias hicieran necesario.

Mientras se reunían los ministros, el Regente mandó llamar a las eminencias de los partidos monárquicos para consultarles acerca de las dificultades del momento, y en primer término para sustituir al general Prim, mientras dure su restablecimiento, no solo en sus funciones de presidente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra, sino también en su proyectado viaje a Cartagena para recibir al rey.

Allí acudieron con noble desinterés y abnegación, guiados solo por el deseo de servir a la patria en un momento de peligro, que en los primeros instantes parecía cierto, y sin excitación de nadie, casi todos los hombres políticos de las tres fracciones revolucionarias. Allí estuvieron desde un principio Topete, Ruiz Zorrilla, Martos, Rivero, Solís, Rodríguez, Santa Cruz, y más tarde Ríos Rosas que abandonó el lecho donde le retenía una indisposición, y en fin, todas las eminencias de la Cámara y fuera de la Cámara.

Bajo la presidencia del regente y con asistencia de muchos de estos personajes, políticos, se celebró un largo Consejo de ministros para tratar de dar fuerza por el momento al Gabinete completándolo, y preparar a la vez un conveniente recibimiento al rey. Desde los primeros momentos la opinión señaló al Sr. Topete como la persona de mayor significación revolucionaria para presidir el Gabinete y salir a recibir al rey; pero el ilustre marino, que no había puesto condición alguna al ofrecer sus servicios para afrontar cualquier peligro, manifestó ciertos escrúpulos de dignidad, temió faltar a su consecuencia y a la lealtad con que ha defendido cierta causa si admitía el cargo para que todos le indicaban, hasta que las declaraciones solemnes del Sr. Ríos Rosas y otras de sus amigos y correligionarios, a cuyo fallo había apelado, desvanecieron sus escrúpulos.

Entonces se acordó que el Sr. Topete se encargara de la cartera de Estado en propiedad e interinamente de la presidencia y del ministerio de la Guerra, nombrándose para la cartera de Ultramar al señor Ayala. De esta manera ha quedado completado el ministerio, hasta la llegada del rey, debiendo salir esta noche el Sr. Topete para Cartagena a recibirle.

También *La Nación* habla del Consejo o junta habida en el ministerio de la Guerra y nos da alguna idea de lo que dijo el Sr. Topete:

«El dignísimo regente del reino, escribe el diario ministerial, lo mismo que los Sres. Topete, Ríos Rosas, Cánovas, Ruiz Zorrilla y Martos, que en unión de los ministros se hallaban al lado del lecho del ilustre herido, hicieron protestas de patriotismo y de amor a la libertad amenazada. El Sr. Topete se mostró a gran altura en sus nobles declaraciones. Manifestó desde luego que en vista del terrible

atentado que acababa de tener lugar, no podía menos de ofrecer desde luego su más decidido apoyo al Gobierno, y que deseaba que los tres partidos revolucionarios se uniesen como un solo hombre para hacer frente a los enemigos de la revolución, entre quienes hay tal vez; hombres capaces de apelar al vil asesinato, como si el primer deber fuera servir de base a ninguna situación aceptable a los ojos del país. Las palabras del Sr. Topete fueron acogidas con la mayor complacencia por todos los circunstantes.

Tan noble rasgo de caballerosidad y patriotismo decidió a todos a aceptar con sumo agrado la indicación hecha por S. A. el regente y por el general Prim, de encargar al ilustre marino de la presidencia interina del Gabinete con la cartera de Guerra.»

La Iberia explica el nombramiento de los nuevos ministros, diciendo que «las heridas que recibió anoche el ilustre general Prim, sin poner por el momento en peligro su importante vida, le imposibilitaban de ocuparse en estos instantes de la cosa pública.»

Después añade que los señores Topete y Ayala «se prestaron a aceptar estos puestos que no ambicionaban, llenos de abnegación, de patriotismo y de amor a la revolución.»

De la importancia que a nuestro juicio tienen estos nombramientos hablamos detenidamente en otro lugar, por lo cual hacemos aquí punto.

El País cita entre los llamados al Consejo a los señores Topete, Ríos Rosas, Ayala, general Córdova, Olózaga (D. José), Martos y Rodríguez (don Gabriel).

El mismo periódico, cuyas relaciones con el señor Topete son harto conocidas, explica en los términos siguientes la entrada de este hombre público en el ministerio:

«Como más abajo decimos, el Sr. Topete, cediendo a los ruegos de sus amigos, a las indicaciones del Consejo de ministros y a la gravedad de las circunstancias, ha tenido que hacer el sacrificio de su situación personal y de sus particulares compromisos para encargarse de la presidencia del Gobierno y de las carteras de Guerra y de Estado.

Creemos que hoy da cuenta en las Cortes de los motivos de esta resolución que no ha tomado sino después de profundas meditaciones; y de todos modos, esperamos que el país honrado y que los corazones rectos apreciarán en su verdadera significación un proceder que de consuno le han impuesto la fatalidad y el patriotismo.»

Escasas e incompletas son las noticias de la guerra desde hace algunos días. El telégrafo nos dijo el 23 que las fuerzas francesas del Norte, al mando del general Faidherbe, habían conseguido una importante victoria; pero ni se sabe dónde, ni se sabe tampoco qué tropas alemanas fueron las vencidas, si las del general Goben o las del general Manteuffel, que, como es sabido, son los que operan en los departamentos del Norte.

Algunos periódicos franceses escriben muy entusiasmados, y en verdad que no vemos motivo para ello. Ciertamente, pero, que aparte de los combates parciales que hay en París, y de los cuales siempre se dicen vencedores los alemanes, algo debe ocurrir que sea obstáculo a los planes prusianos. Desde luego llama la atención que no se diga nada de los ejércitos alemanes del Norte ni de los del Sur; no sabemos siquiera dónde están Manteuffel ni Goben, el príncipe Federico Carlos ni el duque de Mecklenburgo; aquellos no han llegado al Havre, ni estos han pasado de Tours.

Con esto coincide la noticia de que todas las fuerzas alemanas operan un movimiento de concentración hacia París; y aunque dicho así no sea exacto, porque no tienen los alemanes necesidad de semejante concentración, todo induce a creer que los sitiadores de París reciben constantemente refuerzos destacados de los otros ejércitos.

El general Trochu, según parece, tiene el proyecto de hacer una gran salida general con todas las fuerzas de que puede disponer, librando con ellas una suprema batalla, que decida de la suerte de París y aun del éxito de la guerra. Este proyecto dice que ha llegado a noticia de los alemanes, y que, en su consecuencia, quieren reforzar sus líneas de cerco para asegurar la victoria. La autenticidad de estas noticias es dudosa, pero ambas son verosímiles; verosímil es que los parisienses, fatigados del sitio y sintiendo ya la escasez de víveres, quieran decidir su suerte de una vez; y no es increíble tampoco que el rey Guillermo y el estado mayor alemán, aunque tengan confianza en el triunfo, se preparen y fortifiquen todo lo que puedan sus posiciones.

Los horrores del asedio, si no termina pronto de una u otra manera, serán inauditos: de un lado está una populosa ciudad, que ya empieza a sufrir las necesidades del hambre, y de otro un numerosísimo ejército viviendo y durmiendo a la intemperancia del tiempo, en el rigor del invierno, y a la terrible temperatura de tres grados bajo cero. ¿Qué va a suceder si el sitio se prolonga?

La Liberté da la noticia de que el Papa ha vuelto a ofrecer su mediación a los beligerantes: ya antes de empezar la guerra el bondadoso Pío IX dirigió su voz de paz a los dos soberanos; sabido es que el rey Guillermo se manifestó dispuesto a aceptar la mediación del Romano Pontífice; no así Napoleón que creía indispensable la guerra. Ahora, según la *Liberté*, Francia entera, sin distinción de opiniones ni partidos, se ha conmovido al saber que el venerable y santo anciano piensa en los infortunios de los pueblos que guerrean, olvidando los propios; y todos los franceses, no ya los católicos, pero también los protestantes, judíos y racionalistas, sienten viva gratitud hacia el augusto prisionero del Vaticano, cuya mediación, dice la *Liberté*, sería la mejor garantía del honor y seguridad de ambas partes beligerantes, y la más eficaz y aceptable para todos.

El odioso crimen de que anoche fué víctima el general Prim, nos mueve a prescindir hoy de la personalidad del presidente del Consejo para censurarle por lo que dijo en la sesión de ayer. Considerándolo como doctrina del Gobierno, al Gobierno nos dirigimos.

Es evidente que el ministerio ha faltado mil veces a la ley, y que, como le dicen todos los días los mismos diputados liberales, se ha salido de la Constitución y ha atropellado por todo, teniendo además el inaudito atrevimiento de defender estas arbitrariedades. En el banco ministerial se dicen frecuentemente cosas que espantan: reciente está todavía el dicho del Sr. Echegaray, de que contra ciertas oposiciones todo es lícito; no hace mucho tampoco que otro ministro declaró con la mayor frescura que el Gobierno se había salido de la ley, pero que había hecho bien, porque también sus enemigos se habían salido de ella para combatirle; y ayer volvió a proclamar el *salus populi*, declarando que el Gobierno está facultado para prescindir de las leyes.

Entre todos los síntomas de la anarquía y disolución social en que vivimos, ninguno tan grave como este: un Gobierno que siguiera esta monstruosa doctrina, dejaría de ser Gobierno, para

convertirse en poder faccioso y tiránico, que desciende al nivel de los delincuentes, calificados de perturbadores y criminales según ley y justicia. ¿Qué garantía queda de orden ni de seguridad, desde el momento en que el Gobierno se sale de la ley? ¿Quién puede señalar el límite de los atropellos y atentados que pueden cometerse a la sombra de esta facultad trastornadora?

Ayer decía el Gobierno que si federales o carlistas u otros que no son carlistas ni federales, acuden a las armas, no va a dejar que se pierda la libertad por respetar los artículos constitucionales, y ante declaración tan llena de peligros, es necesario protestar enérgicamente. Si vuestras leyes y constituciones no os dan los medios suficientes para gobernar, ¿por qué no las modificáis? ¿por qué no hacéis otras? En la ley debe tener todo gobierno medios bastantes para ocurrir a todas las necesidades.

Las teorías sustentadas por individuos del Gobierno actual, puestas en práctica en todas sus aplicaciones, convertirían la sociedad en una horda de salvajes. «Me combaten los partidos saliendo de la ley, pues no tengo obligación de estar sujeto a ella; ¡magnífica doctrina! Según esto son inútiles la mayor parte de las leyes; ¿qué necesidad, hay de leyes penales? ¿para qué hay leyes que marcan los procedimientos y castigos para los asesinos y ladrones? Estos se salen de la ley; luego, para ellos, son excusados los jueces y los tribunales.

El Gobierno no puede salirse de la ley: el Gobierno es la representación de la ley o no es nada. ¿A dónde vamos a parar?

Los diarios ministeriales no están conformes al juzgar del atentado de anoche, con relación al orden público.

La Nación y *El Imparcial* aparecen en este gravísimo asunto en oposición con *La Iberia*.

Para *La Nación* «los planes de los asesinos contribuyeron a la alianza de la gran falanga monárquico-revolucionaria que hoy anda en estrecho lazo ante la necesidad de la situación pública hará impotentes sus desesperados esfuerzos e imposible su triunfo. La situación, pues, lejos de debilitarse se fortaleció.»

No es menos explícito *El Imparcial*, que escribe lo siguiente:

«El crimen cobard que anoche puso en peligro la vida del general Prim, produjo honda sensación en todas las clases sociales. Sin temor de que el orden se alterara, porque estos excesos despiertan los sentimientos de las personas honradas, había en los cafés y en otros centros de reunión menos concurrencia y menos animación que de ordinario. Nosotros frecuentamos varios círculos, hablamos con hombres de diferentes partidos políticos, y en todas partes notamos la misma indignación y la misma generosidad de sentimientos.»

La Iberia, por el contrario, afirma que los asesinos de anoche no solo han herido al general Prim, sino en el *libertad de la patria*.

«La opinión pública, prosigue el diario astiano, reclamaba anoche a una voz medidas energéticas por parte del Gobierno para castigar severa y ejemplarmente a los autores y cómplices del crimen, y para prevenir otros sucesos de igual índole que pudieran cometer gentes fanatizadas por predicciones insensatas, y alentadas tal vez en sus miserables intentos por la mas monstruosa, la mas injustificada y la mas inmoral de las coaliciones.»

Si el Gobierno no renuncia a las contemplaciones y no procura levantar el principio de autoridad, que tan quebrantado anda por la benevolencia con que ha tratado a sus innoberes, a sus libertades, a sus villanos enemigos, a esas gentes turbulentas y de mal vivir, que solo pueden medrar con las perturbaciones y la anarquía, los patriotas verdaderos concluirán por negarle su apoyo y su concurso, y el Gobierno haría el vacío a su alrededor, y lo que es peor todavía, alrededor también de la ley.

Por fortuna, creemos que el Gobierno no se mostrará sordo a las exigencias de la opinión, y que, colacionando a la altura de las circunstancias, salvará la causa de la libertad, cueste lo que cueste.

Y como si no bastara la excitación gravísima que *La Iberia* hace al Gobierno en las anteriores líneas, añade en otra parte:

«El Sr. Topete irá desde luego a Cartagena a recibir al monarca, y el Gobierno acaso presente hoy en las Cortes algún proyecto importante para hacer frente a las circunstancias y afianzar el triunfo de la libertad contra toda clase de asechanzas y de enemigos.»

Resultado, que mientras la situación se fortalece, según *La Nación*, y no hay razones de que el orden se altere, porque estos excesos despiertan los sentimientos de las personas honradas, según *El Imparcial*, esta tarde es casi seguro que se propendará a las Cortes la suspensión de las garantías individuales, según *La Iberia*.

Esta ya nos la teníamos tragada.

EL SR. TOPETE EL 23 DE DICIEMBRE.

Hoy que el Sr. Topete sube a la presidencia del Gobierno que ha propuesto las autorizaciones, en reemplazo del general Prim, y asume las carteras de Guerra y Estado, y se anuncia que va a Cartagena a recibir al duque de Aosta, nos parece oportuno reproducir algunos párrafos del discurso que pronunció aquel señor en la sesión del 23 de Diciembre.

Decía entre otras cosas el Sr. Topete, combatiendo el proyecto de las autorizaciones, y después de leer algunos trozos del manifiesto de Cádiz:

«Señores, ¿se puede exigir al hombre que ha firmado esto que vote la autorización que nos ocupa? (Aplausos en los bancos de las oposiciones). Si nosotros no hemos podido hacer en el orden moral todo lo que habíamos ofrecido; si ante las perturbaciones naturales que de las revoluciones surgen, no hemos podido cumplir todas las promesas que hicimos; si somos los primeros en infringir la Constitución; si yo lo hago, ¿a qué quedo reducido? A un conspirador vulgar, y yo no soy un conspirador vulgar. (Bien, muy bien en los bancos de la izquierda). Yo me levanto, yo me sublevo, yo hice el sacrificio de rasgar la disciplina militar en honor de mi país; y la honra de mi país, la de la Constitución que nos hemos dado y la de los fueros del Parlamento, es la que aquí vengo a defender.

«Mi posición es especial...»

... recordad los compromisos que por la representación que tengo en la revolución he contraído públicamente; recordad lo que en mas de una ocasión he dicho respecto a los acuerdos de la Asamblea Constituyente; recordad las simpatías que aquí he manifestado, y las declaraciones que he hecho, consecuencia de los deberes que me impuse y del deber que se me trazó y que tanto me ha costado seguir ante la revolución.

... en esa respetuosa distancia en que esas simpatías y esos mis compromisos adquiridos en dos años me colocan, yo, señores, declaro que haré fervientes votos, porque con la elección del señor duque de Aosta se haga la felicidad de mi país.

Pero una vez hecha esta declaración, no puede exigirse de mí que acoja esa distancia: ni yo puedo acordarla, ni vosotros podéis exigir más de mí dignidad.

No en balde se dicen aquí palabras, no en balde se demuestran aquí simpatías, no en balde se contraen compromisos, y los compromisos que los hombres se imponen es preciso que los cumplan.

Siento mucho que la toma de posesión del rey electo tenga lugar a la raíz de estos debates, pues lo vais a hacer jurar una Constitución que por exaltar al trono quince días antes, vosotros habéis rasgado.

Antes de sentarme, señores diputados, debo hacer aquí una declaración que tengo preconcebida desde el momento en que dejé el muelle de Cádiz para romper la disciplina militar.

El día que se abrieron aquí las Cortes Constituyentes, cumpliendo el encargo que me hicieron mis compañeros, vine a poner su conducta a los pies del Parlamento, declarando franca y lealmente que nosotros confesábamos que habíamos cometido un acto de insurrección, que nuestra idea era buena, pero que habíamos faltado a la ley.

El día que me decidí a ponerme al servicio de mi país, desatendiendo mis deberes de soldado, concebí el propósito de que aquel fuera mi último acto militar. El hombre que arrastra con su autoridad a un cuerpo completamente ajeno a la política (y que por no haber entrado en estas luchas ardientes no ha contraído ni puede contraer mis compromisos ni mis responsabilidades), este hombre no puede volver a mandar. Esta mi determinación hubiese sido la misma si los príncipes de mi simpatía se hubiesen sentado en el trono de San Fernando. No tomeis esto por un acto de hostilidad. Así me lo exige la memoria de mis padres: he faltado a la ley, y yo no puedo volver a mandar. Espero que esta semilla de sus frutos en el porvenir.

Hay además otra cosa: es dije aquel día, Sres. Diputados, que mi espíritu había estado fuertemente preocupado antes de decidirme a tomar una determinación de tanta importancia. Yo sabía que ilustres personas iban a ser víctimas de aquel acto. Yo quiero que cuando esas personas piensen en el perdido trono, y lo que es más, en la perdida patria, no digan nunca, jamás, que esa anticipada desgracia (porque siempre como estaban las cosas y los hombres se hubiese realizado), que esa anticipada desgracia, digo, llevada a cabo por mis actos, pudiera ser escalón de mi fortuna.

Así, pues, Sres. Diputados, declaro solemnemente ante la Cámara, que mañana pediré mi retiro del servicio militar. (Muchos Sres. Diputados: No, no). Es una decisión inquebrantable: así me lo demandan los manes de amigos y generales a cuyas órdenes he servido.

Con motivo del atentado contra el general Prim, los diarios ministeriales echan de menos un cuerpo bien organizado de agentes de orden público. Hace mucho tiempo que los periódicos de oposición estamos diciendo lo mismo, y nada hasta ahora habíamos conseguido. Los atropellos a la propiedad y a la seguridad de las personas se sucedían en Madrid y provincias con la más completa impunidad, y eran inútiles las constantes escitaciones que los periódicos no ministeriales hacíamos a las autoridades.

Hoy *El Imparcial* se lamenta de que en las calles de Alcalá y del Turco, donde se cometió el atentado contra la vida de D. Juan Prim, no hubiese un solo agente de orden público, y que siempre se note la misma falta en los momentos críticos y en los sitios donde la presencia de la autoridad o de sus delegados pueda ser útil.

Así sucedió, en efecto, la primera noche de los atropellos del casino carlista y en las primeras horas de la segunda; así sucedió cuando los asaltos de las redacciones de *El Siglo*, de *El Papetito* y de otros periódicos; y entonces lamentábamos nosotros, como hoy se lamenta, y con motivo, *El Imparcial*, de la ausencia de los agentes de la autoridad en los sitios convenientes.

Según este periódico, sólo una pareja de servicio que había en la Cibeles tuvo conocimiento del delito, pero sin duda esto no ha sido suficiente para averiguar quiénes fueron los delincuentes.

El Puente de Alcolea echa también de menos una buena organización del cuerpo de orden público, y censura duramente que los actuales empleados en este cuerpo frecuenten las tabernas y se entretengan con las muchachas de servir, perdiendo de este modo el prestigio que deben tener los delegados de la autoridad. Y para probar que la desorganización del citado cuerpo no puede llegar a más, nota escandalizado que ni aun los cocheros de los carruajes de plaza que obstruyeron el paso al general Prim han sido habidos.

El Puente llama la atención del Sr. Sagasta, sustituto del Sr. Rivero, para que reorganice convenientemente el cuerpo de orden público.

Creemos que así lo hará el nuevo ministro de la Gobernación después del atentado contra la vida del general Prim.

Es digno de notarse el cambio que de pocos días a esta parte han experimentado los diarios ministeriales respecto a la cuestión de orden público.

Ellos, que tiempos atrás nos anunciaban a cada momento trabajos reaccionarios o republicanos contra la situación, son hoy los primeros a desmentirlos. Vemos con gusto esta enmienda en nuestros adversarios, y deseamos que dure.

Leemos en La Iberia:

«Los alarmistas de oficio han hecho correr la voz de que se había alterado el orden en algunas provincias. Nada han dicho acerca de esto los telegramas; antes al contrario, la tranquilidad continúa inalterable. Nada decimos acerca de esto, pero bueno es que el público se convenza de la inexistencia de semejantes habladuras, que se han de reproducir todavía con más insistencia por los interesados en crear dificultades a la consolidación de la obra de Setiembre.»

El Eco de España condena enérgicamente el atentado de que ha sido víctima el general Prim.

Dice entre otras cosas lo siguiente: «El hecho es horrible, abominable, digno de la execración de todos los hombres de bien. Nosotros, en nombre propio, y en nombre de nuestro partido, reprobamos tan bárbaro crimen; le reprobamos, tan enérgicamente, con la misma razón, con la misma indignación que cuando fué víctima de igual atentado nuestro inolvidable amigo y jefe, el ilustre general Narváez, y cuando pereció a manos de infames asesinos el noble e infortunado ayudante Baseti.»

Nosotros no tenemos necesidad de salir de nuestra gloriosa historia, de nuestros eternos principios para condenar esta clase de crímenes.

Baldón y maldición sobre los asesinos! La justicia es el alma de la sociedad y de los partidos organizados para gobernar a las sociedades humanas, y la justicia es una, inmutable, indivisible, eterna e igual para todos.»

Mas adelante añade:

«No se pueden aplaudir acciones criminales por el solo hecho de que aprovechen momentáneamente a los partidos exagerados que las ponen en planta. El crimen, el crimen es y será eternamente el

remordimiento constante de los que ahora estarán severos y antes fueron disculpadores, si no actores de hechos semejantes.»

Nosotros con nuestra limpia bandera podemos repetir al final de estas líneas nuestra más enérgica condenación contra el crimen villano de que ha sido víctima el general Prim.

Nosotros no queremos la muerte del adversario, queremos que abra los ojos, que vea claro, que se arrepienta y viva.»

Verdaderamente es notable el hecho que cuenta *El Imparcial*, relativo al capitán general de Castilla la Vieja, Sr. Pulido. Este señor, sacramento hace dos días en Madrid, se hizo trasladar al ministerio de la Guerra tan pronto como supo el atentado contra Prim, para enterarse personalmente del estado del enfermo.

El mismo periódico cuenta que ayer se decía en el Congreso que si las Cortes no celebraban sesión anoche, ocurriría algo grave.

A las nueve de la noche se constituyó el juzgado de la Universidad en el gobierno civil de la provincia, y tanto el juez como el gobernador han trabajado toda la noche en averiguación de los delincuentes. Acerca del resultado de estas diligencias, dice *El Imparcial*:

«No han sido del todo ineficaces, según a altas horas de la noche hemos oído, las gestiones prácticas para buscar el origen y los autores del crimen cometido contra la persona del general Prim y su ayudante. Algun antecedente se iba reuniendo, y es de esperar que la acción de la justicia alcance a los autores y cómplices de tan execrable atentado.»

La Iberia explica del modo siguiente la huida de los asesinos:

«Estos lograron escapar, cosa que no pudo serles difícil, atendida la falta de vigilancia que la actual situación ha ejercido y la noble confianza que la ilustre víctima tenía en la lealtad de sus actos y en los levantados sentimientos del heroico pueblo de Madrid, el cual desea en masa vindicarse de la mancha que han querido arrojar sobre él unos cuantos miserables.»

El Puente de Alcolea apoya a *El Correo Militar* en la censura que este periódico hace de las continuas traslaciones de jefes del ejército:

«Es inútil, dice *El Correo*, ocuparse del movimiento continuo en que se encuentran los jefes y oficiales de las armas generales; cuanto más se dice acerca del particular, más aumentan las disposiciones de la superioridad en este sentido.»

A muy tristes comentarios se presta esa desconfianza que se advierte de los que, perteneciendo a la noble carrera de las armas, deberían señalarse como tipos acabados de honradez, de abnegación y patriotismo; pero indudablemente el virus maligno no desaparece ni desaparecerá en el ejército mientras no se adopte otra línea de conducta y haya buenos ejemplos que imitar.

El Puente, sin embargo, disculpa al ministro de la Guerra de la manera siguiente:

«Creemos que de estas medidas no es del todo responsable el general Prim más que moralmente, y que obedecen a que se abuse de su credulidad por personas de su confianza, haciéndole ver espíritu de oposición política en lo que solo son rencillas interiores de los cuerpos, fundadas la mayor parte de las veces en faltas a las prescripciones de los reglamentos.»

También son de *El Correo* estas noticias militares:

«El comandante de artillería D. Luis Villaverde, ha sido dado de baja en el ejército.»

«Ha sido destinado en clase de comandante de ingenieros al ejército de Filipinas, el capitán D. Manuel Cortés y Aguiló.»

«Se han destinado a la situación de reemplazo los capitanes de infantería D. Adolfo Soto y Fernández y D. Pedro Jimenez Estepa.»

La Correspondencia publica, anoche las siguientes noticias sobre el viaje del duque de Aosta.

«El duque de Aosta viene en la fragata *Nunancia*. A esta y a la escuadra española acompaña la fragata italiana *Principe Humberto*, y en ella viene el general Cialdini. Precede a los buques un vapor-aviso italiano. Un largo despacho telegráfico recibido hoy por el Gobierno da amplios detalles sobre la despedida del duque de Aosta y su embarque. El ministro de Marina de Italia viene hasta Cartagena con cuatro ayudantes. El príncipe Humberto comió con su hermano a bordo de la *Nunancia*. El duque de Aosta viste el traje de marino español.»

«En el salón de sesiones para el día de la jura se colocará la tribuna para el cuerpo diplomático, según costumbre, al lado de una de las puertas de entrada.»

«Hoy han principiado los trabajos de decoración de la fachada principal del palacio de las Cortes para el día de la jura.»

«El general Prim y la comitiva que con él va a esperar al duque de Aosta, llegarán a Cartagena el 29 por la mañana y saldrán el 30 a mediodía, llegando a Aranjuez el 31 por la mañana.»

Parece que en los retamales de la villa de Madrid, término de Humera, fueron hallados en la noche del 24 dos guardas de las posesiones de la condesa de Chinchón, muertos a puñaladas. El alcalde de dicho punto, que salió acompañado de algunos vecinos armados en busca de los asesinos, se queja de la falta de la Guardia civil en aquella comarca.

«Mal hace el alcalde de Chinchón, dice con este motivo *La Política*, en quejarse de la ausencia de la Guardia civil, sabiendo que, ocupada como se halla esta fuerza en impedir muestras de entusiasmo por el futuro monarca en el ferrocarril de Cartagena a la corte, no es cosa de que fuese a cuidar de un servicio tan secundario como el de proteger las vidas de los vecinos honrados. ¡Tienen unas cosas estos alcaldes!...»

Algunos periódicos de la noche continúan ocupándose en combinaciones ministeriales.

«Los cabildos para el futuro ministerio, dice *La Epoca*, son cada vez mayores, dando de este modo fuerza al pensamiento de hacer un ministerio de notables presidido por el duque de la Torre, único en que se presta a entrar el Sr. Olózaga.»

El general Prim hace fuerza de vela contra este pensamiento, pero las auras de Florencia traen rumores de que no hará el general Prim ministerio si no es de conciliación.

Indudable es, según el mismo periódico, que los progresistas andan algo soliviantados.»

Según *La Correspondencia*, ayer adelantaron poco los rumores de combinaciones ministeriales, y todo parece esperar el momento supremo.

«De lo que se sigue hablando con insistencia, añade el diario noticiario, es de la formación de un núcleo liberal conservador que sirva de garantía al sostenimiento del espíritu democrático de la Constitución vigente, oponiéndose siempre a toda trasgresión.»

Confirmando las noticias de *La República Ibérica*, dice anoche *La Política*:

«A invitación de los que fueron sus comandantes,

los batallones republicanos de voluntarios han empezado a entregar hoy las armas, con gran espontaneidad y hasta con entusiasmo.»

Además de los gobernadores de Castellón y Lérida, según un periódico, han dimitido sus cargos otros tres gobernadores.

Continúa el movimiento de tropas, a juzgar por las siguientes noticias que anoche publica un periódico:

«Las tropas que guarnecían a Toledo han salido de dicha ciudad a cubrir la línea del ferrocarril por donde ha de venir el príncipe Amadeo.»

«Hoy ha llegado a Madrid, de paso para Alcalá de Henares, el escuadrón de caballería de Talavera que se hallaba de guarnición en Ciudad-Real.»

«El brigadier D. Hidalgo de Quintana ha tomado ya el mando de la brigada que se encuentra en Córdoba.»

«Hoy ha llegado a Madrid el regimiento de Ingenieros que se hallaba en Guadalajara.»

«De hoy a mañana llegará a Madrid el brigadier Búrgos.»

Véase ahora lo que dice anoche *La Política* sobre el particular:

«Mañana por la noche sale decididamente el general Prim para Cartagena, a fin de hallarse allí el día de la llegada del príncipe Amadeo.»

El camino que ha de recorrer este se hallará cubierto por soldados, tan cercanos los unos a los otros que casi se dan la mano.

Como para esto se necesita mucha fuerza, que no hay disponible ó fácilmente trasladable, en el programa del viaje régio se ha establecido que el príncipe Amadeo duerma en Albacete, parada que en rigor era innecesaria, con el solo objeto de que las tropas que deje tendidas tras sí, recogidas por un tren especial, puedan adelantarse mientras el príncipe descansa y tenderse de nuevo en el camino que debe recorrer al día siguiente.

Esto se parece bastante al juego escénico en que los comparsas salen por una puerta y vuelven a entrar por otra, figurando con muy pocos hombres ejércitos interminables; pero prueba que Prim entiende la farsa admirablemente.

Si hace lo mismo con los encargados de las aclamaciones populares no costará tanto como se supone librado para la fabricación de entusiasmo aostino, así en provincias como en Madrid.

Esta nueva combinación sería tanto más oportuna cuanto que, a pesar de que en diferentes puntos de la villa del oso y del madroño hay cuatro banderines de enganche para preparar aclamaciones espontáneas, hasta ahora son muy pocos los alistados, pues si bien algunos tomarán con gusto el madroño, los más no quieren hacer el oso.»

Según dice un periódico, las fuerzas escalonadas en la línea desde Cartagena a Madrid, se calculan en 18.000 hombres.

Si en este número no está incluida la guarnición extraordinaria de Cartagena, tendremos 14.000 hombres en Cartagena, 18.000 desde Cartagena a Madrid: total, 32.000. Agréguese a esta cifra las fuerzas de la guarnición de Madrid y las acantonadas en los pueblos limítrofes, y habrá que convenir en que la primera revista que pasará al ejército español el príncipe Amadeo será la más imponente que los habitantes de Madrid habrán presenciado.

Solo guardias civiles hay estacionados de Cartagena a Madrid, según se dice, 3.000, de aquí han salido 900. Parece que están distribuidos a pareja por kilómetro y un destacamento en cada paso a nivel, puente, túnel y alcantarillas.

Dice *La Esperanza* que según datos que corren entre el público, se han despachado estos días en las tiendas de telas más de dos mil varas de percalina negra. Aunque los tiempos no son buenos, no es de creer que la viruela y la fiebre amarilla hayan causado tantos lutos. ¿Para qué serán?

Leemos en La Política:

«Se habla de una notable carta dirigida al director de *El Tiempo*, señor marqués de Bedmar, por el redactor del mismo periódico, Sr. Perez de Molina, explicando las causas que le mueven a retirarse de dicho periódico.»

En este documento, que según tenemos entendido, ha sido enviado a Córdoba, donde se halla el señor conde de San Luis, el antiguo redactor de *La Libertad*, *Los Tiempos* y *El Estándar* declara que «antes que alfonso es monárquico.»

Dice un periódico que la comisión que formula dictamen sobre el proyecto de ley de incompatibilidades, se reunió ayer tarde para acabar de redactarlo, a fin de leerlo hoy mismo. Anteayer estuvo también reunida hasta más de la tres de la mañana, escuchando las opiniones de varios señores diputados que combaten algunas soluciones del dictamen.

La cuestión es árdua para los revolucionarios.

Parece según un diario noticiario, que esta acordada ya el restablecimiento de las cuatro direcciones de administración, beneficencia y sanidad, establecimientos penales y comunicaciones.

Añade el mismo periódico que el Sr. D. Venancio González volverá a desempeñar la dirección de Comunicaciones.

También la diputación provincial, a pesar de sus apuros, quiere festejar el día de Aosta.

«La diputación provincial de Madrid, dice anoche *La Correspondencia*, en sesión celebrada el día 24 del actual, ha dispuesto solemnizar la llegada a Madrid del duque de Aosta de la manera siguiente:

1.º Conceder 50 dotes de 2.000 rs. 25 para las acogidas en el Hospicio y otras 25 para las del colegio de la Paz, que se adjudicarán por sorteo y serán abonables el día que las agraciadas tomen estado.

2.º Conceder también 60 dotes a igual número de huérfanas pobres de la provincia que acrediten su buena conducta.

3.º Que el día de la jura se dé un extraordinario a los acogidos en los establecimientos de la beneficencia provincial.

4.º Costear los derechos de grado a ocho practicantes de medicina y cuatro de farmacia, que se hallen en la clase de pobres, y que por su aplicación se hagan merecedores de ello.

5.º Una iluminación sencilla en la casa que ocupan sus oficinas.»

Según *La Correspondencia*, el Sr. D. Blas no piensa abandonar el puesto que ocupa hasta que se forme nuevo ministerio al llegar el duque de Aosta.

Escriben de Madrid a *La Correspondencia Vascongada*, que tal vez no fuera el general Prim, sino el general Serrano el encargado de formar ministerio, y para ello estaba de acuerdo con Ulloa, con Ardanaz, con Calderón Collantes, con Zabala y otros personajes no menos importantes.

Según el *Aurora* del 25 del corriente, parece que algún periódico republicano de Madrid modificará su actitud política, inclinándose algo hacia la monarquía democrática del duque de Aosta.

Fué tanta la aglomeración de gente que se presen-

tó en las oficinas de la Deuda para señalar día de pago de intereses de la renta consolidada, que a pesar de haberse despachado cerca de 600 personas con más de 3.000 facturas, según dice un periódico, la autoridad tuvo que dar números para continuar el señalamiento de dicha clase de deuda el 2 de Enero próximo.

Dice un periódico liberal:

«En tres días se ha discutido el proyecto de Hacienda, y acaso no sean necesarios otros tantos para los demás proyectos de carácter urgente.»

Ahora bien, digámonos si no estábamos en lo firme al condenar la imprudencia cometida por la mayoría con su inoportuno acuerdo del Senado.»

La Epoca confirma anoche los rumores de disgustos entre el Sr. Ruiz Zorrilla y el general Prim. El hecho, dice, es cierto y la causa el nombramiento de gobernador de Madrid.

Las órdenes dadas para prender a los redactores, no diputados, de *El Combate*, han sido efectivas únicamente, hasta ahora, en la persona del señor Rispa.

Parece que al cabo el Sr. Sagasta ha desistido de figurar en el viaje a Cartagena.

Dice un periódico que además del Sr. Paul y Angulo son varios los diputados republicanos que han salido para Andalucía.

El día 30 del actual se embarcarán en el correo 600 hombres con destino al ejército de Cuba, y el 5 de Enero o próximo se embarcarán también otros mil hombres con igual destino.

En las próximas elecciones, que serán en Febrero, los pueblos tienen que elegir diputaciones provinciales, ayuntamientos, diputados a Cortes y senadores.

Así se verá España convertida en campo de Agramante.

Según dice un periódico, ha sido nombrado administrador de Santiago de Cuba D. Juan González de Vales, y añade que este señor es antiguo y consecuente progresista.

Pues basta.

Leemos anoche en La Correspondencia:

«Se no ha dicho que esta mañana ha tenido lugar un lance desagradable entre dos capitanes de la milicia, el cual pudo tener fatales consecuencias a no ser por la mediación de algunas personas que lo presenciaron: ignoramos los motivos que lo originaron.»

Anuncia un periódico que anteayer salió de las prisiones militares de San Francisco para las Baleares un capitán del regimiento del Rey, habiendo ingresado en el mismo día en dichas prisiones un hermano suyo, capitán del mismo regimiento.

Parece que el ayuntamiento enviará listas a las Cortes, a las oficinas públicas y a otros edificios para que sea todo lo eficaz posible la suscripción pública que ha acordado abrir a favor de los pobres para solemnizar la jura.

Sólo así podrá dar algún resultado dicha suscripción, por su color aostino.

Por orden comunicada por el ministerio de la Guerra al de la Gobernación, con fecha 21, se dispone que el art. 6.º de la ley de 3 de Junio de 1868 sobre fomento de población rural, se entienda modificado en el sentido de que los quintos favorecidos por la citada ley sean destinados a la primera reserva, puesto que, como en ella disfrutaban licencia limitada en sus hogares al tenor del art. 16 de la ley de 24 de Marzo último, se llena de este modo el objeto que se propuso aquella ley.

Con fecha 26 del corriente se crea una plaza de oficial de la clase de segundos en el ministerio de Fomento con el sueldo de 7.500 pesetas, nombrándose para que la desempeñe a D. Francisco Camps y Pons.

Por la dirección de la Caja de Depósitos, se anuncia que el viernes 30 del corriente y demás días laborables que sean necesarios verificarán dichas oficinas, desde las diez de la mañana a las dos de la tarde, el señalamiento que debe preceder al pago de los intereses de depósitos en efectos públicos constituidos en la referida Caja.

SECCION RELIGIOSA.

SANTO DE HOY. La fiesta de los Santos Inocentes. SANTO DE MAÑANA. Santo Tomás Cantuariense, obispo y mártir.

CULTOS.

Se gana el Jubileo de Cuarenta horas en la iglesia de las Salesas Nuevas, calle de San Bernardo, donde por la mañana habrá Misa mayor, y por la tarde preces y reserva.

En la parroquia de San Isidro, San Ginés y en San Pedro, habrá Misa cantada para la renovación de Sagradas Formas.

VISITA DE LA CORTE DE MARIA. Nuestra Señora de Monserrat en su iglesia, ó la de la Cabeza en San Ginés.

Se reza de Santo Tomás con rito doble y color encarnado, haciéndose conmemoración de las cuatro octavas.

CORREO DE HOY.

Escriben de Niza:

«En Génova se conspira abiertamente para quitarle Niza a Francia.»

En Vintimille, patria del presidente de la Cámara de los diputados en Brangerie, donde la conspiración es todavía más ardiente, el cónsul es todavía un Nicols (hijo de Niza).

En Niza, el prefecto dice publicarse un periódico italiano, *Il Diritto*, que reivindica a Niza por el reino italiano y se deja abierto un círculo en donde las gentes, aunque ilegalmente, predicán la insurrección y la expulsión de los franceses. Así no hay que extrañarse que se oye decir que los soldados franceses están violentos cuando se encuentran solos en la ylos paisanostambien franceses les sucede lo mismo calle, y además son insultados, y solo esperan que algún día se empleen contra ellos.»

ÚLTIMA HORA.

A pesar de lo que en otro lugar copiamos del *Imparcial*, parece, según nuestras noticias, que

los proyectiles que han herido en el hombro al general Prim han sido dos, y no ocho, como dice aquel periódico.

La herida de la mano derecha es de consideración, y la del hombro grave, pues que ha habido fractura de huesos; pero según la opinión de los facultativos, no es mortal de suyo, porque no afecta a ninguno de los órganos indispensables para la vida.

El enfermo ha pasado bien la noche, y esta mañana ha sentido una reacción favorable.

El parte expuesto al público en el ministerio de la Guerra es de que el enfermo sigue mejor.

CONGRESO.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde con gran concurrencia de diputados.

Los montpensieristas y carlistas se hallan en sus puestos.

La minoría republicana sigue abstenta.

Se leen los decretos encargando de los ministerios de la Guerra, Estado y presidencia al Sr. Topete, y del Ultramar al Sr. Ayala.

El Sr. Topete pide la palabra, y dice que al saber que el general Prim había sido víctima de un atentado, creyó herida la revolución, y ha venido a salvarla aceptando el puesto para que ha sido nombrado.

Que no abdica ninguno de sus compromisos, pero que traerá y defenderá al rey que las Cortes han elegido. (Aplauso de la mayoría.)

Dice que necesita poderes extraordinarios para salvar la sociedad.

El Sr. Figueras entra en el salón.

Concluye diciendo que salvará a toda costa el orden y la patria.

El marqués de la Vega de Armijo empieza anatematizando el crimen que se ha intentado cometer, y dice que estará al lado del Gobierno para apoyar el orden y salvar la libertad, por más que esta no ha de perecer, por más que perezca el general Prim.

El Sr. Figueras anatematiza también el asesinato que se ha pretendido cometer, en nombre de sus amigos de la minoría republicana.

Quiere salirse, y el señor presidente de las Cortes le ruega que se quede hasta el fin de la sesión.

El Sr. Vinader dice que reprueba el crimen en nombre de sus amigos, y manifiesta que estos actos le afirman más y más en sus ideas, únicas que pueden salvar la sociedad.

El Sr. Topete da gracias a estos señores.

El Sr. Ruiz Zorrilla se lamenta del acontecimiento y exclama: «Al huir al general Prim se me ha herido a mí, se ha herido a la revolución.»

Se lamenta de que tantos tiranos como ha habido en esta tierra hayan vivido tranquilos, y se haya tratado de asesinar al hombre que se ha consagrado a defender la libertad.

Dice que quien tiene la culpa del atentado de ayer son los que en la prensa y en la tribuna han desacreditado al general Prim haciéndole impopular.

Concluye rogando a todos que se unan para condenar las demagogias y salvar la libertad verdadera, y ofreciendo su vida en holocausto a los que un aplausido el acto.

Estas palabras las dice mirando a los republicanos.